



TRABAJO DE FIN DE ESTUDIOS / IKASGAIEN AMAIERAKO LANA
MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

.....

**ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO DE
AMPARO: EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.**

Asira Belarra Aramendía

DIRECTOR / ZUZENDARIA

María Cristina Zoco Zabala

Pamplona / Iruñea

21/01/2021

RESUMEN.

En el presente trabajo se va a analizar el requisito de la especial trascendencia constitucional introducido con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como requisito de admisión del recurso de amparo. Con él se trata de controlar el número de recursos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional para no saturar los medios de los que este dispone.

El objetivo de este estudio es determinar cómo se ha aplicado este nuevo requisito por el Tribunal Constitucional y cuál ha sido la evolución de su jurisprudencia, con el fin de averiguar si se ha conseguido el fin que perseguía la reforma.

Para ello se van a analizar cada uno de los supuestos de especial trascendencia constitucional establecidos en la STC 155/2009, de 25 de junio.

PALABRAS CLAVE.

Reforma, recurso de amparo, requisito, admisión, jurisprudencia.

ABSTRACT.

On the following pages I will analyze the requirement of special constitutional significance introduced with the reform of the Organic Law of the Constitutional Court as an admission requirement of the appeal for amparo.

This is about controlling the number of appeals that reach the constitutional court to not saturate the available means.

The point of this essay is to determine how the Constitutional Court has applied this new mean, and its jurisprudence evolution, in order to find out if the aim of the reform has been achieved.

To attain all of this I am going to analyze each of the cases of special constitutional significance established in STC 155/2009, of June 25.

KEY WORDS.

Reform, appeal of amparo, requirement, admission, jurisprudence.

ABREVIATURAS.

TC - Tribunal Constitucional

STC - Sentencia del Tribunal Constitucional

ATC - Auto del Tribunal Constitucional

ETC - Especial Trascendencia Constitucional

TS - Tribunal Supremo

Art. - Artículo

Núm. - Número

LOT - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

LOPJ - Ley Orgánica del Poder Judicial

CE - Constitución Española.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. LA LEY ORGÁNICA 6/2007, DE 24 DE MAYO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL.....	8
3. TRÁMITE DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE AMPARO.	19
3.1 Requisitos de admisión de carácter general.....	19
3.1.1 Plazo.	19
3.1.2 Legitimación.....	19
3.1.3 Agotamiento de la vía judicial previa.....	21
3.1.4 Lesión subjetiva de un derecho fundamental.	22
3.1.5 Aspectos formales de la demanda de amparo. (art. 49.2 y 3 LOTC y su carácter subsanable).....	22
3.1.6 Especial trascendencia constitucional.	23
3.2 Requisitos específicos del recurso de amparo frente a resoluciones judiciales....	23
3.2.1 Agotamiento de los medios de impugnación.....	23
3.2.3 Previa invocación formal en el proceso.....	26
3.3 Aspectos formales del trámite de admisión.....	27
4. ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL.	30
4.1 Caracterización general.	30
4.2 Dimensión formal.....	31
4.3 Dimensión material.	36
5. SUPUESTOS DE ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL (STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO).	40
5.1 Nueva faceta de un derecho fundamental.....	40
5.2 Aclaración o cambio de doctrina por parte del Tribunal Constitucional.....	43
5.3 Vulneración de un derecho fundamental que provenga de la ley o disposición de carácter general.....	46
5.4 Reiterada interpretación jurisprudencial de la ley lesiva de un derecho fundamental.	48
6. CONCLUSIONES.....	58
7. BIBLIOGRAFÍA.....	61
8. ANEXO JURISPRUDENCIAL.	63
8.1 Sentencias del Tribunal Constitucional.....	63
8.2 Autos del Tribunal Constitucional.....	68

1. INTRODUCCIÓN

El recurso de amparo se configura como una garantía constitucional recogida en el artículo 53.2 CE para la protección y defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Sección 1ª, Capítulo 2º, Título I, así como los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 30.2 CE, frente a su vulneración bien por los poderes públicos, bien por las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales ordinarios y en todo caso, por el Tribunal Supremo

En desarrollo de los artículos 53.2 y 161.1 b) de la Carta Magna, los artículos 41 a 44 LOTC regulan los actos, disposiciones o vías de hecho susceptibles de protección mediante amparo constitucional, distinguiendo los siguientes supuestos de recurso en función de la procedencia del acto o la resolución:

- Recursos contra decisiones y actos sin valor de ley de las Cortes o asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de cualquiera de sus órganos (art. 42 LOTC).
- Recursos contra disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades, funcionarios o agentes (art. 43 LOTC).
- Actos y omisiones de órganos judiciales (art. 44 LOTC)
- Al margen de los supuestos contemplados en la LOTC, existe una última modalidad de recurso de amparo recogida en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), cual es el recurso de amparo electoral contra la proclamación de candidaturas (art. 49 LOREG) y contra la proclamación de electos (art. 114 LOREG)¹.
- Al margen de los supuestos previstos legalmente, debe señalarse que se ha ampliado el objeto del recurso de manera que cuando la lesión de un derecho fundamental se produzca entre particulares y no se haya obtenido una reparación por los órganos judiciales se podrá acudir, como última vía, al recurso de amparo. Este supuesto, como decimos, no se encuentra previsto expresamente ni en la CE, ni en la LOTC, sino que en este caso la protección se realiza indirectamente a través del control de la aplicación

¹ SOSPEDRA NAVAS, F.J. “Los requisitos procesales del recurso de amparo: el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la especial trascendencia constitucional”. *Cuaderno de derecho Local*. ISSN 1696-0955, 2015. Págs. 171 y 172.

y garantía de los derechos fundamentales que realiza la jurisdicción ordinaria. Esto es, el recurso de amparo se interpone contra las sentencias judiciales cuando se entienda que estas no han tutelado adecuadamente los derechos fundamentales con motivo de la resolución de la controversia suscitada entre particulares.

El recurso de amparo tiene en todo caso carácter subsidiario, pues constituye la última vía a la que cabe acudir cuando los cauces ordinarios de protección han resultado insatisfactorios. La subsidiariedad del amparo se deduce directamente del artículo 53.2 CE que prevé que la tutela de los derechos fundamentales se recabe a través de procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y, una vez agotado este y en su caso, mediante el recurso de amparo. Es decir, se impone la necesidad de agotar todas las posibilidades de tutela de los derechos y libertades públicas a través de la vía judicial antes de acudir al Tribunal Constitucional. El Tribunal en la STC 130/2018, de 12 de diciembre recuerda esta exigencia, cuando señala que: “Desde sus primeras resoluciones la jurisprudencia constitucional ha destacado la naturaleza subsidiaria y no cautelar ni preventiva del recurso de amparo, lo que ha sido utilizado reiteradamente como criterio de admisibilidad. En la Constitución (art. 53.2) y la LOTC [arts. 41.1, 43.1 y 44.1 a.] el amparo constitucional se configura como una específica vía de protección de determinados derechos y libertades fundamentales “sin perjuicio de su tutela general, encomendada a los Tribunales de Justicia”, esto es, de forma subsidiaria a la actuación de los órganos judiciales, a quienes ha de otorgarse, en todo caso, la posibilidad de reparar las presuntas violaciones de derechos fundamentales. De esta manera: “el principio de subsidiariedad que rige el proceso de amparo constitucional, y que lo hace necesariamente final, obliga a que solo pueda ser intentado cuando se hayan hecho valer ante los Tribunales ordinarios los derechos que se estiman vulnerados y se hayan agotado todos los recursos utilizables. [...] No respetar la subsidiariedad del proceso de amparo, pronunciándose este Tribunal antes que los tribunales ordinarios, sería tanto como “advertir a los ciudadanos de que no pueden esperar que los Jueces y Tribunales ordinarios protejan sus derechos fundamentales, y que sólo en este Tribunal pueden confiar a este respecto, lo que no es compatible con el dictado constitucional”. Al mismo tiempo, con este diseño es posible prevenir que quede abierta una vía de intersección de la jurisdicción constitucional con la ordinaria, lo que, de forma indirecta, provocaría una indeseable inseguridad jurídica: de una parte, en cuanto se residenciarían ante el Tribunal Constitucional cuestiones aún no solventadas definitivamente en la vía judicial; de otra,

porque finalizado el proceso de amparo proseguiría la vía judicial, en cuyo curso no sería imposible un pronunciamiento contradictorio con lo resuelto en vía de amparo”.

Inicialmente, el recurso de amparo se configuró como una instancia más, aunque la última para la tutela para la protección de los derechos fundamentales², de tal forma que se entendía que cualquier vulneración de un derecho fundamental daba la oportunidad de acudir al recurso de amparo, lo que motivó la situación ya conocida de acumulación de asuntos ante el Tribunal Constitucional debido fundamentalmente al exceso de demandas de amparo que se presentaban. Esta situación provocó la necesidad de reformar el recurso suprimiendo suprimiendo la idea de que toda lesión subjetiva de a un derecho fundamental debe tener acceso al amparo y, frente a ello, racionalizando su utilización. Esta es la finalidad principal que se persigue con la LOTC, llevada a cabo por la LO 6/2007, de 24 de mayo, mediante la que se pretende una mayor agilidad y atención en los procesos constitucionales a través de una modificación sustancial del régimen de admisión del recurso de amparo. Tras la reforma será necesario justificar su admisión diferenciando dos líneas argumentativas “la relativa a la lesión del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, y la atinente a la trascendencia constitucional del recurso tendente a su preservación y establecimiento” (STC 140/2013).

El objeto principal de este trabajo es el estudio de la especial trascendencia constitucional como requisito de admisión del recurso de amparo, tras la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional operada mediante la LO 6/2001, de 24 de mayo, para lo que se analizan cada uno de los supuestos establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC 155/2009, de 25 de junio y cuál ha sido la interpretación y evolución de cada uno de ellos. Previamente a este análisis, se hace preciso efectuar una breve referencia a las líneas principales de la reforma legal comentada, así como al régimen general de admisión del recurso de amparo.

² CARRILLO, M. (Coord.), “Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 87, 2008, pág. 101. El autor ha señalado que se entendía el recurso de amparo “como una instancia procesal más del procedimiento ordinario de tutela, que no como una vía especial para su protección”.

2. LA LEY ORGÁNICA 6/2007, DE 24 DE MAYO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL.

A lo largo de los años el número de demandas interpuestas ante el Tribunal fue aumentado de forma considerable, provocando el colapso del mismo y el consiguiente retraso en los asuntos que debía resolver.

Para entender mejor esta cuestión vamos a realizar un análisis del número de demandas de amparo presentadas antes y después de la reforma, así como el impacto de la misma sobre la fase de admisión. En los años anteriores a la reforma la media de recursos que se presentaban al año era de 10.262. En 2016 se registró el máximo con 11.471 recursos de amparo presentados ese año ante el Tribunal Constitucional. Esto suponía que las Secciones tenían que examinar unos 2500 o 3000 asuntos cada año, lo cual resultaba desproporcionado. Tras la reforma operada por la ley 6/2007 de 24 de mayo sin embargo, no se observó una disminución de los asuntos presentados ante el Tribunal Constitucional, siendo 9840 en 2007, 10279 en 2008 y 10792 en 2009. Otro problema que esto provocó, fue la acumulación de asuntos³ y los recursos que el Tribunal Constitucional debía resolver, teniendo en cuenta los nuevos ingresos más los acumulados, eran 22006 en 2007, 19294 en 2008 y 15088 en 2009. Cómo podemos observar, fue en 2009 cuando se empieza a observar un leve disminución, pero no es realmente hasta 2010 y 2011 cuando las cifras presentan una evidente disminución. Los años siguientes a 2011 la media de recursos de amparo que se presentan al año se sitúa en 7073, es decir, se observa una disminución del 30%⁴.

Por otro lado, resulta interesante analizar los datos de admisión de los recursos de amparo antes y después de la reforma en relación con los asuntos ingresados.

³ Los recursos acumulados posteriormente a la reforma, pero interpuestos anteriormente a la entrada en vigor de la ley 6/2007, de 24 de mayo tenían que ser admitidos o inadmitidos según la normativa anterior (ATr. 3ª).

⁴ En 2017 el número de asuntos presentados ante el Tribunal Constitucional es 6286, es decir 5181 asuntos menos que en 2006.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ingresa	9476	11471	9840	10279	10792	8947	7098	7205	7376	7663	7203	6685	6286
admitidos	403	270	313	325	173	203	149	142	167	116	99	74	70
% tasa	4,2	2,3	3,2	3,2	1,6	2,3	2,1	2,0	2,3	1,5	1,4	1,1	1,1

Fuente: Carlos Padrós.

La tasa de admisión ha ido disminuyendo progresivamente año tras año, de 403 recursos de amparo admitidos en 2005 a tan sólo 70 en 2017. Según Padrós Reig, con ello puede observarse que la reforma de 2007 no ha influido inmediatamente sobre la tasa de admisión del recurso de amparo, pero si que ha supuesto una gran influencia en cuanto al descenso de la misma⁵. También se pueden observar otros datos cómo que el mayor número de presentación de asuntos, no conlleva el mayor número de admisiones. Por el contrario si que puede observarse que los años con menos asuntos ingresados tienen la tasa más alta de inadmisión.

Este aumento desmedido de demandas de amparo presentadas desde el inicio de los años noventa generó la necesidad de replantearse la función institucional del recurso. La finalidad del mismo no es únicamente la protección de los derechos fundamentales de los particulares en su vertiente subjetiva e individual, sino también la tutela de la Constitución y sus principios. En la práctica se observó el predominio de la vertiente subjetiva, es decir, la protección de los derechos fundamentales, sobre la vertiente objetiva, de defensa de la Constitución. Para restituir la función originaria del recurso se incluye con la reforma un nuevo requisito necesario para que la demanda de amparo puede admitirse a trámite, la “especial trascendencia constitucional”.

Esta concepción del amparo como un recurso más para poder garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales, derivó en que el Tribunal dedicara la mayor parte de su tiempo a decidir sobre la admisión de los recursos, llegando a colapsar en gran medida sus medios materiales y personales. Como ha señalado Aragón Reyes, el Tribunal Constitucional empleaba gran parte de su esfuerzo en recursos que finalmente iban a ser inadmitidos. Esto conllevaba que el Tribunal Constitucional

⁵ PADRÓS REIG, C. “La exigua tasa de admisión del recurso de amparo constitucional”. *Revista de Administración Pública*, núm. 209, 2019, págs. 315 y 316.

destinara mucho tiempo y esfuerzo a asuntos de los que finalmente no se iba a tener que ocupar por ser desestimados, y ello disminuía el tiempo disponible para poder ocuparse de los asuntos que finalmente se admitían⁶. El resultado era la acumulación masiva de asuntos y la consiguiente demora en las resoluciones.

La doctrina ha atribuido este problema, en rasgos generales, a dos principales causas. La primera de ellas de origen legislativo, ya que uno de los rasgos que debe caracterizar el sistema de protección de los derechos que se pretende con el recurso de amparo, es que sea un filtro eficiente y capaz de evitar la sobrecarga de trabajo del Tribunal, así como la acumulación de asuntos, favoreciendo igualmente la resolución de cuestiones en un plazo de tiempo razonable, lo cual, como hemos visto, no se lograba con la regulación inicial del recurso de amparo. La segunda causa es de origen jurisprudencial, es decir, se debe a la interpretación y aplicación que hace el Tribunal Constitucional ha venido haciendo del recurso, que ha determinado la ampliación de su ámbito objetivo u objeto a través de dos vías principales, por un lado, la constitucionalización de gran parte del Derecho Procesal (en la medida que afecta a garantías procesales previstas en el art. 24 CE), lo que supone la ampliación del ámbito de protección de los derechos fundamentales, y por otro, la ampliación de la legitimación pasiva en la interposición del recurso, ya que si bien la parte demandada son los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y entes públicos, ahora también podrá interponerse recurso de amparo por vulneración de derechos entre particulares cuando no se haya obtenido satisfacción por las vías ordinarias.

La Ley 6/2007, de 24 de mayo, trata de solucionar este problema, que deriva de la realidad práctica del funcionamiento y organización del Tribunal, a través de dos vías complementarias.

En primer lugar, mediante la reforma del incidente de nulidad de actuaciones regulado en los arts. 241 y 228 de la LOPJ. Este mecanismo se prevé para impugnar

⁶ ARAGÓN REYES, M. "La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional". *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, pág. 13. El autor señala que "la causa primordial de todo ello no es otra que la avalancha imparable de amparos que se cierne sobre el Tribunal (en el año 2006 ingresaron 11.471). Esto ha provocado que Letrados y Magistrados tuvieran que dedicar más de los dos tercios de su tiempo a los amparos y que esa misma proporción se manifestase entre las sentencias de amparo y las dictadas en el resto de los procesos constitucionales (no hay más que ver los cuadernillos del BOE que contienen la publicación de las sentencias para apreciar gráficamente esa cuantiosa desproporción). Pero es que, además, la mayor parte del esfuerzo realizado en los amparos se destinaba, precisamente, a los que se inadmiten, con lo cual el Tribunal empleaba una parte sustancial de su tiempo a trabajar «en negativo», es decir, a estudiar aquello de lo que no iba finalmente a ocuparse. Por supuesto que ese tiempo es muy superior al dedicado igualmente en amparo a aquello de lo que el Tribunal sí va ocuparse, esto es, a preparar y deliberar las sentencias".

aquellas resoluciones que hayan puesto fin al proceso y no sean susceptibles de recurso ordinario, ni extraordinario. Es decir, se trata de un procedimiento para hacer valer la nulidad de los actos procesales, cuando la resolución que puso fin a los mismos, haya alcanzado firmeza. Su función es reparar las lesiones de aquellos derechos fundamentales que no hayan podido ser subsanados por las vías ordinarias⁷.

Con la reforma llevada a cabo con la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, se amplía el ámbito objetivo del incidente de nulidad de actuaciones, ya que se admite su planteamiento por “...cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución...”⁸. Anteriormente a la reforma, sólo cabía por defectos de forma o incongruencia en las resoluciones judiciales y ahora abarca a la lesión de cualquier derecho fundamental. Se establece de este modo una limitación del ámbito objetivo del recurso de amparo, al establecer el incidente excepcional de nulidad de actuaciones como un procedimiento previo al recurso en aquellos casos en que el mismo sea admisible y el último recurso en aquellos casos en que el amparo no es admisible.

⁷ STC 11/2013, de 28 de enero, FJ 2º: “el incidente de nulidad de actuaciones sirve, como así ha querido el legislador orgánico, para reparar aquellas lesiones de cualquier derecho fundamental que no puedan serlo a través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos por la ley; su función en materia de tutela de derechos es, por tanto, la misma, en el ámbito de aplicación que le otorga el art. 241.1 LOPJ, que la realizada como consecuencia de la interposición de un recurso ordinario o extraordinario y como tal debe ser atendida por los órganos judiciales. Ahora bien, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del art. 241.1 LOPJ (en la redacción que le ha dado la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), el incidente de nulidad de actuaciones no es un recurso más, sino un remedio al que se puede acudir excepcionalmente para reparar la vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”.

⁸ Artículo 241.1 LOPJ “No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”.

	Antes de la reforma	Tras la reforma
Art. 241 LOPJ.	<p>1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo, podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, ésta no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.</p> <p>Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.</p> <p>Resto Idéntico.</p>	<p>1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.</p> <p>Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.</p> <p>Resto Idéntico.</p>

Con esta modificación del incidente de nulidad de actuaciones se trata de reforzar la función de los tribunales ordinarios de garantizar la tutela de los derechos fundamentales y se profundiza en el carácter subsidiario del recurso. Nos encontramos, según Aragón Reyes, con un doble objetivo, por un lado, que el recurso de amparo sea “plenamente subsidiario, de tal manera que siempre haya tenido la jurisdicción ordinaria la oportunidad de remediar la vulneración del derecho”, y por otro lado, limitar la llegada de asuntos al Tribunal Constitucional al otorgar a la jurisdicción ordinaria una última vía

para remediar las lesiones de derechos antes de acudir al amparo, siendo además inadmisibile el amparo en el caso de no haber agotado tal vía judicial⁹.

Por su parte, Gómez Fernández y Montesinos Padilla han entendido que el aumento del ámbito material del incidente de nulidad de actuaciones, objeto de numerosas críticas¹⁰, supone un intento de compensación por la restricción del acceso al Tribunal Constitucional, siempre y cuando se respete el límite establecido en el art. 241 LOPJ “que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”. Además, han comentado que el objetivo del incidente de nulidad de actuaciones era aliviar la carga de trabajo del Tribunal y con la reforma se modifica y se convierte en una pieza más del nuevo recurso de amparo. Con ello, se pretende reforzar la función de los jueves y tribunales ordinarios garantes de derechos y proteger el carácter subsidiario del recurso de amparo¹¹.

Por último, será necesario que se haya resultado el incidente de nulidad de actuaciones antes de la presentación del recurso de amparo aunque no haya sido notificado al recurrente, como manifestación del requisito de agotamiento de la vía judicial previa.

En segundo lugar y con el objetivo de agilizar el trámite admisión de las demandas de amparo, la Ley Orgánica 6/2007 modifica los artículos 49 y 50 de la LOTC y, de modo específico, se introduce un nuevo requisito, la especial trascendencia constitucional. A partir de este momento, no será suficiente que el ciudadano aduzca lesión subjetiva del derecho fundamental. Es preciso, también aducir que el recurso de amparo posee especial trascendencia constitucional que justifique su admisión y resolución por el Tribunal, lo de conformidad con el art. 50.1 b) LOTC tendrá lugar cuando “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia

⁹ ARAGÓN REYES, M. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, pág. 21.

¹⁰ La ampliación del ámbito objetivo del recurso de amparo motivó importantes críticas aun cuando ni siquiera había entrado en vigor. En este sentido, se debatieron cuestiones como su carácter no devolutivo (Desdentado Bonete, 2007) o la inconstitucionalidad del art. 241.1 LOPJ (Morenilla Allard, 2013) por vulneración del derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías y tutela judicial efectiva.

¹¹ GÓMEZ FERNÁNDEZ, I. Y MONTESINOS PADILLA, C. “Una década de incidencia de nulidad de actuaciones: ¿aclaración, reforma o supresión?”. *Revista de Derecho Constitucional*, núm 113, 2018, págs. 74-77.

para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”.

Una comparación entre la redacción de ambos preceptos antes y después de la reforma permite constatar los aspectos principales en que se concreta la misma.

	Antes de la reforma	Tras la reforma
Art. 49. Recurso de amparo	<p>1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado.</p> <p>2. Con la demanda se acompañarán:</p> <p>a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo.</p> <p>b) En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo.</p> <p>3. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal.</p>	<p>1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.</p> <p>2. Con la demanda se acompañarán:</p> <p>a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo.</p> <p>b) En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo.</p> <p>3. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal.</p> <p>4. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso.</p>

<p>Art. 50. Especial trascendencia constitucional.</p>	<p>1. La Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:</p> <p>a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable alguno de los requisitos contenidos en los artículos 41 a 46 o concurra en la misma el caso a que se refiere el artículo 4.2.</p> <p>b) Que la demanda se deduzca respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional.</p> <p>c) Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional.</p> <p>d) Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual, señalando expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias.</p> <p>2. La providencia a que se refiere el apartado anterior, que indicará el supuesto en el que se encuentra el recurso, se notificará al demandante y al Ministerio Fiscal. Contra dicha providencia solamente podrá recurrir el Ministerio Fiscal, en súplica, en el plazo de tres días. El recurso se resolverá mediante auto.</p> <p>3. Cuando en los supuestos a que alude el apartado primero no hubiere unanimidad, la Sección, previa audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de diez días, podrá acordar mediante auto la inadmisión del recurso.</p>	<p>1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurren todos los siguientes requisitos:</p> <p>a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.</p> <p>b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.</p> <p>2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución.</p> <p>3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.</p> <p>4. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.</p>
---	--	--

	<p>4. Contra los autos a los que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores no cabrá recurso alguno.</p> <p>5. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, la Sección procederá en la forma prevista en el artículo 85.2; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.</p>	
--	---	--

Dos son las notas principales que caracterizan, tras la reforma, el nuevo régimen de admisión del recurso de amparo y que resultan complementarias entre sí para el mismo fin antes señalado.

En primer lugar, el trámite de admisión del recurso de amparo se configura como un requisito de carácter positivo, y no negativo, es decir, se exige preceptivamente y en todo caso un juicio previo de admisión, frente a la regulación anterior en la que la inadmisión del recurso era una posibilidad de la que podía hacer uso el Tribunal cuando apreciado desde un inicio que se incumplían alguno o algunos de sus requisitos. Con la regulación vigente el Tribunal Constitucional deberá examinar y comprobar que el recurso presentado cumple con todos los requisitos necesarios para su admisión, entre ellos, y de modo singular, la concurrencia de la especial trascendencia constitucional del amparo pretendido. No obstante, esta modificación en la configuración del trámite de admisión del recurso ha sido relativizada por algunos autores como Cabañas García quien discrepa de esta tesis al entender que el control que tiene que realizar el Tribunal Constitucional para admitir las demandas de amparo no ha cambiado ni en la forma de realizarlo, ni en su resultado respecto de los recursos previos a la reforma de 2007¹².

¹² GARCÍA CABAÑAS, J. C. "El recurso de amparo que queremos". *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 88, 2010, págs. 76-78. : "los comentaristas se suman al criterio de que el nuevo artículo 50 LOTC trae consigo una «inversión» del juicio intelectual, al decidir la Sección sobre la admisión a trámite de cada recurso, de tal modo que se ha pasado de una labor de comprobación de que no concurren causas de inadmisión, juicio éste de naturaleza negativa, a otro positivo sobre si se cumplen los requisitos exigidos y sobre todo el de la mentada especial trascendencia constitucional del recurso (126). Debemos discrepar, no obstante, de ambos enfoques: tanto de que ello represente en su devenir intelectual, una forma

En segundo lugar, con la reforma legal examinada tiene lugar una objetivación del recurso de amparo, dado que ya no es sólo, ni principalmente, una instancia más para la reparación de la lesión derechos fundamentales ocasionada al particular, sino que se atribuye al mismo una función institucional vinculada a la necesidad de delimitar la interpretación o aplicación de la Constitución o el contenido y alcance de los derechos fundamentales. Sin embargo, esta nueva caracterización no supone que el recurso sea plenamente objetivo, ya que el fin último del recurso continúa siendo tutelar los derechos fundamentales a través de un mecanismo judicial¹³, pero su admisión exige ahora que además el amparo cumpla una función de delimitación del marco constitucional; en esto se traduce la exigencia de acreditar la necesidad de “una decisión de fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional”¹⁴.

En definitiva, la modificación del incidente de nulidad de actuaciones y la reforma del régimen de admisión del recurso de amparo convergen en la misma finalidad de

distinta de evaluar la admisión del recurso, como que a su través determine una «agilización» del procedimiento, con la consiguiente reducción del trabajo en sede de amparo. Lo primero, porque es obvio que la verificación de si los requisitos concurren o no en un recurso, es un juicio técnico que inevitablemente obra siempre en las dos direcciones (positiva y negativa): se comprueba si los requisitos existen y eso implica en simultáneo descartar las correspondientes causas de inadmisión. Dicho de otro modo: una demanda de amparo nunca se revisa sólo para comprobar que se cumplen los requisitos de admisión, ni para buscar en ella sólo lo contrario. Esto únicamente tendría sentido, y apenas como un punto de partida al analizar la demanda, si la Ley Orgánica (hoy o ayer) partiera de una verdad interina en alguno de ambos sentidos, diciendo que «el recurso de amparo se tendrá como admisible salvo que...», o a la inversa. Pero eso hasta ahora no ha ocurrido, ni en todos los años —desde la entrada en vigor de la LOTC en 1979, hasta la LO 6/2007— en que se construyó la decisión de admisión a partir de las causas que la imposibilitan (período en el que jamás, por cierto, se ha interpretado que el legislador buscara favorecer las admisiones), ni ahora en 2007 en que se ha hecho a partir de las causas positivas que lo permiten. El control a efectuar, por ello, no varía ni en la forma de realizarlo ni en su resultado, respecto de los recursos anteriores a la LO 6/2007. Debe revisarse si existen óbices de procedibilidad (ahora, también, que se justifique debidamente la especial trascendencia: art. 49.1 LOTC), y si no los hay, verificar entonces si la demanda de amparo, de un lado, narra un caso de lesión constitucional claramente identificable como tal con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal y existe apariencia de lesión; y, de otro lado, si el recurrente ha logrado incardinar su caso en alguno de los parámetros del artículo 50.1.b) LOTC con el filtro de la STC 155/2009. El que la demanda de amparo se decante a la postre en cada asunto de uno u otro lado, admisión o no, será la consecuencia del control mismo. Los conceptos del artículo 50.1.b) LOTC no predeterminan una función mayormente positiva que negativa o viceversa. Admisión o inadmisión no constituyen metodologías de trabajo”.

¹³ MATIA PORTILLA, F. J. “La trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 86, 2009, pág. 346. Este autor ha señalado, que respecto a la nueva regulación del recurso de amparo, la cual introduce el requisito objetivo de la especial trascendencia constitucional, “La primera cuestión que puede plantearse es si la nueva regulación pretende objetivar plenamente el amparo constitucional. Tal interrogante merece, a nuestro entender, una respuesta negativa. El amparo no puede ser objetivado al ser, en esencia, un mecanismo para la tutela subjetiva de determinados derechos fundamentales. Ésta es la configuración que se confiere a dicho instrumento procesal en el artículo 53.2 CE, por lo que su objetivización plena exigiría la previa revisión constitucional”. Otros autores ARAGÓN REYES, M. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, pág. 19 por el contrario han entendido que tras la reforma de la LOTC “se opta por una concepción objetiva del recurso de amparo. Más todavía, por una concepción «exclusivamente» objetiva, en la medida en que desaparece la dimensión de tutela”.

¹⁴ Art. 50.1 b) LOTC.

ampliar la función de los tribunales ordinarios como garantes con carácter general u ordinario de la tutela de los derechos y libertades fundamentales, a la vez que se refuerza también el carácter subsidiario del recurso¹⁵.

¹⁵ LO 6/2007, de 24 de mayo, exposición de motivos: “(1)a experiencia acumulada tras más de 2 años de actividad del Tribunal Constitucional desde su creación ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso del tiempo han llegado a convertirse en problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal. Entre ellas destaca, por un lado, el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal. Por otro lado, la realidad de los hechos ha permitido también constatar la lentitud de los procedimientos que se desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas ellas respecto de las que es el momento de dar respuesta legislativa (...) Así, respecto al mayor desarrollo de la función de garantía de los derechos fundamentales en relación con las demás funciones del Tribunal Constitucional, la ley procede a establecer una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales (...) Se trata de medidas encaminadas a lograr que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria”.

3. TRÁMITE DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE AMPARO.

Un breve examen del régimen de admisión del recurso de amparo puede realizarse a través del análisis, separadamente, de los requisitos establecidos con carácter general, del tratamiento específico del recurso interpuesto frente a resoluciones judiciales y, por último, de las cuestiones de carácter formal o procesal.

3.1 Requisitos de admisión de carácter general.

3.1.1 Plazo.

Para los actos sin valor de ley de los órganos parlamentarios del Estado y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el plazo es de tres meses. Hay que mencionar que en este caso el recurso de amparo no está sujeto a la vía judicial previa, lo que quiere decir que, una vez resueltos los recursos internos, comienza a computar el plazo mencionado. Para los actos del Gobierno, órganos ejecutivos de las comunidades autónomas o de las distintas Administraciones Públicas y sus agentes o funcionarios, el plazo es de 20 días y para los actos u omisiones de órganos judiciales, el plazo es de 30 días. En los dos últimos casos será necesario el agotamiento de la vía judicial previa, por lo que, la notificación de la resolución judicial firme conlleva el inicio del cómputo del plazo establecido.

3.1.2 Legitimación.

La legitimación para la interposición del recurso de amparo se vincula inicialmente, y con carácter general, a la condición de parte en el previo proceso; así resulta de lo que establece el art. 46 LOTC cuando señala que estarán legitimadas para la interposición del recurso aquellas personas que “hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente” (Art. 46 LOTC). Pero este artículo tiene que ser interpretado junto con el art. 162.1 b) CE que concede legitimación a “toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo”. En este sentido el propio Tribunal ha establecido que la legitimación alcanza “a toda aquella persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la violación, por obra del poder, de un derecho fundamental, aunque la

violación no se produjese en su contra" (AATC 1193/1988, 232/2000). Es decir, podrá interponer recurso de amparo una persona que no haya sido parte en el proceso cuando justifique un interés legítimo.

Esta norma, sin embargo, tiene que ser interpretada junto con el art. 162.1 b) CE que concede legitimación a “toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo”. En este sentido el propio Tribunal ha establecido que la legitimación alcanza “a toda aquella persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la violación, por obra del poder, de un derecho fundamental, aunque la violación no se produjese en su contra" (AATC 1193/1988, 232/2000). Es decir, y al amparo de este criterio, podrá interponer recurso de amparo una persona que no haya sido parte en el proceso cuando justifique un interés legítimo.

Cabe señalar, que la jurisprudencia constitucional ha ampliado la legitimación para la interposición del recurso de amparo también a las personas jurídicas; así lo declara la STC 241/1992, FJ 4º, cuando afirma que “aun cuando el art. 53.2 de la Constitución utiliza, como el art. 125, el término "ciudadanos", este Tribunal ha venido sosteniendo que con él se hace referencia tanto a las personas físicas como a las jurídicas (así, STC 53/1983), no ya porque a ambas se refiere también el art. 162.1 b) de la Constitución, sino, antes aún, porque "si todas las personas tienen derecho a la jurisdicción y al proceso y se reconocen legítimamente las personificaciones que para el logro de un fin común reciben en conjunto el nombre de personas jurídicas, puede afirmarse que el art. 24.1 comprende en la referencia a ‘todas las personas’ tanto a las físicas como a las jurídicas”.

Por último, como supuesto excepcional las organizaciones jurídico publicas podrán acudir al recurso de amparo. La STC 64/1988, de 12 de abril, estableció que los poderes públicos son titulares del derecho a tutela judicial efectiva y que son equiparables a las personas jurídico privadas en relación con la posibilidad de ser titulares de derechos fundamentales, siempre y cuando puedan recabar para ellas mismas derechos de los que deban disfrutar sus miembros o todos los ciudadanos. Dicha titularidad es suficiente para justificar su legitimación en el proceso de amparo en el que se reclama la protección de los anteriores derechos.

3.1.3 Agotamiento de la vía judicial previa.

El recurso sólo procederá cuando no se haya obtenido satisfacción por las demás vías previstas por el ordenamiento para la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, antes de acudir al recurso de amparo es requisito indispensable agotar todos los medios de impugnación disponibles para cada caso concreto dentro de las vías judiciales ordinarias (art. 44.1 a) LOTC).

El Tribunal Constitucional ha insistido en la necesidad de este requisito como mecanismo para reformar al principio de subsidiariedad del recurso en diversas resoluciones¹⁶.

Como decimos, para interponer el recurso de amparo es necesario haber agotado todos los medios disponibles, entre ellos el incidente de nulidad de actuaciones. Esta necesidad se justifica en la preservación de la subsidiariedad del recurso de amparo, siendo a los tribunales ordinarios a quienes les corresponde reparar las lesiones de los derechos fundamentales alegados por los ciudadanos. Sin embargo, con la STC 112/2019, de 3 de octubre, se modifica el criterio que mantenía el Tribunal Constitucional sobre cómo tiene que entenderse el requisito de agotar la vía judicial previa. Este cambio de doctrina supone interpretar este requisito de manera “finalista y flexible”, de modo que no haya que utilizar todos los medios disponibles, sino aquellos que claramente sean ejercitables y los “que no quepa duda respecto de la procedencia y la posibilidad real y efectiva de interponer el recurso”, ya que además, si se interponen todos los recursos disponibles se puede correr el riesgo de incurrir en extemporaneidad. De esta forma el incidente de nulidad de actuaciones será únicamente obligatorio cuando la vulneración del derecho fundamental se produzca en la última sentencia del procedimiento. En los

¹⁶ SSTC 11/2013, de 28 de enero, FJ 2º “el requisito del agotamiento de la vía judicial exigido por el art. 44 1 a) LOTC es una condición de admisibilidad del recurso de amparo, que responde a la finalidad de preservar el carácter subsidiario del mismo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca *per saltum*, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional” y SSTC 217/2012, de 26 de noviembre, FJ 3º “La exigencia de agotamiento de la vía judicial previa tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca *per saltum*, esto es, sin dar oportunidad a los órganos judiciales de pronunciarse y, en definitiva, remediar la lesión que luego se invoca como fundamento del recurso de amparo. Así, el requisito de agotar la vía judicial no es en modo alguno una formalidad cuya eficacia real pueda ser debilitada por una interpretación decididamente antiformalista del precepto que la contiene, sino que se trata de un elemento esencial en el sistema de articulación de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria, cuyo exacto cumplimiento resulta indispensable para preservar el ámbito que la Constitución reserva a la jurisdicción ordinaria (art. 117.3 CE) y al propio tiempo para no desnaturalizar la función jurisdiccional propia de este Tribunal como intérprete supremo de la Constitución (entre otras muchas)”.

casos como el que se enjuicia en la STC 112/2019, en los que la vulneración del derecho fundamental no se imputa a la resolución del último órgano judicial, sino a la inmediatamente anterior, entiende el Tribunal Constitucional que será potestivo el incidente de nulidad de actuaciones como vía para obtener tutela de los derechos fundamentales que hayan resultado vulnerados.

El TS en cuanto a las resoluciones recurridas en casación e inadmitidas por no tener interés casacional, en su ATS 11433/2017, de 11 de diciembre estableció lo siguiente: “solo cuando se haya decidido la inadmisión se podrá afirmar que contra la resolución judicial impugnada no cabe recurso ordinario, ni extraordinario” y será ese momento cuando podrá interponerse el incidente de nulidad de actuaciones.

3.1.4 Lesión subjetiva de un derecho fundamental.

De acuerdo con la verdadera función del recurso, como ya hemos mencionado anteriormente, es requisito fundamental que la demanda de amparo justifique la vulneración de algún derecho fundamental protegible a través de esta vía. Se trata además, de un requisito de obligado cumplimiento, cuya ausencia no es subsanable.

Cabe recordar que los derechos fundamentales son aquellos recogidos en los artículos 14 a 38 CE, pero los derechos susceptibles de recurso de amparo son los artículos 14, 15 a 29 y 30.2 CE

3.1.5 Aspectos formales de la demanda de amparo. (art. 49.2 y 3 LOTC y su carácter subsanable)

(En el art. 49.1 y 2 LOTC se establecen los siguientes requisitos de forma relativos al recurso de amparo.)

El recurso de amparo se iniciará mediante demanda “en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”(art. 49.1 LOTC). Como ya hemos visto, en la demanda deberá quedar debidamente justificado estas dos cuestiones para su admisión a trámite.

Además, junto a la demanda deberá acompañarse los siguientes documentos: “a) el documento que acredite la representación del solicitante del amparo; b) en su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo”, a los que se añade la necesidad de aportar copia de la propia demanda y sus documentos anexos (art. 49.2 LOTC).

3.1.6 Especial trascendencia constitucional.

Este nuevo requisito introducido con la reforma de la LOTC lo estudiaremos a continuación en el apartado 4 de este trabajo.

3.2 Requisitos específicos del recurso de amparo frente a resoluciones judiciales.

3.2.1 Agotamiento de los medios de impugnación.

Para interponer el recurso de amparo frente a resoluciones judiciales será necesario agotar previamente la totalidad de recursos disponibles dentro de la vía judicial en la que se ha producido la vulneración del derecho fundamental. Los recursos disponibles serán aquellos establecidos en la Ley como admisibles para el proceso judicial del que se trate. El no agotamiento de esos recursos previos, aunque se hayan promovido otros en la jurisdicción ordinaria, hace imposible acudir al recurso de amparo.

Esta regla general ha sido objeto, sin embargo, de una elaborada doctrina por parte del Tribunal Constitucional, vistas las consecuencias gravosas que para el recurrente puede conllevar tanto la interposición de recursos no pertinentes o inadmisibles ante los Tribunales ordinarios (la extemporaneidad del amparo), como, en el extremo contrario, la falta de agotamiento de aquellos recursos que puedan considerarse normales adecuados (la inadmisión del recurso de amparo). La resolución de estas cuestiones debe armonizar dos factores, el principio de seguridad jurídica, en el sentido de limitar la pendencia del proceso, y el derecho a la tutela judicial, según el cual todo interesado tiene derecho a utilizar cuantas acciones y recursos sean útiles para la defensa de sus derechos e intereses.

Así, la jurisprudencia ha establecido, por ejemplo, que cuando el órgano judicial en un determinado caso indique que las vías del ordenamiento están agotadas, la parte demandante presumirá que lo están. Sin embargo, no puede entenderse vulnerado un

derecho fundamental cuando la sentencia no mencione los recursos que procedan, ante qué órgano deben interponerse y el plazo para ello. La instrucción de los recursos no forma parte del *decisum* de la sentencia; en este sentido, no supone un impedimento para recurrir, siendo omisión salvable por el propio interesado. Cuestión distinta es que se realice una instrucción equivocada que induzca a error al interesado.

En suma, la información errónea por parte de los órganos judiciales acerca de los recursos exime de responsabilidad a la parte de su cumplimiento; sin embargo, compete al demandante la carga de interponer los recursos que sea procedentes, aunque la sentencia no haga mención sobre el particular. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que “el agotamiento de los recursos utilizables en la vía judicial se refiere a los medios procesales que razonablemente puedan ser conocidos y ejercitados por los litigantes y no exige del ciudadano que supere unas dificultades de interpretación que exceden de lo razonable, como ocurriría en el presente caso si se considerase no cumplido el requisito establecido en el art. 44.1 a) LOTC” (STC 26/1991, de 11 de febrero). Así mismo, en la STC 15/2019, de 11 de febrero, el Tribunal creyó conveniente recordar “que es doctrina de este Tribunal que la instrucción sobre recursos no forma parte del *decisum* de la resolución, ni está dotada, por ello, de la fuerza propia de este. Antes bien, constituye una simple información al interesado, el cual no está obligado a seguirla si la considera errónea, siendo entonces imputables al recurrente en amparo únicamente las consecuencias que pudieran derivarse de la indebida falta de agotamiento de la vía judicial si resulta que se equivocó al estimar errónea la indicación judicial, lo que, como ha quedado razonado, no puede declararse en el presente caso”.

En este mismo sentido, señala el Tribunal Constitucional que “el carácter subsidiario del recurso de amparo no obliga a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación posibles, sino tan solo aquellos normales que, de manera clara, se manifiestan como ejercitables (STC 188/1990, de 26 de noviembre, FJ 3º); esto es, “cuando no quepa duda respecto de la procedencia y la posibilidad real y efectiva de interponerlo [el recurso], así como de su adecuación para reparar la lesión de los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo” (STC 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 3º), sin necesidad de efectuar complejos análisis jurídicos, puesto que no es exigible al ciudadano que supere dificultades de interpretación que excedan de lo razonable (SSTC 65/1985, de 23 de mayo, 114/1986, de 2 de octubre, 188/1990, de 26 de noviembre) y además se requiere que su falta de utilización tenga origen en la conducta voluntaria o negligente de la parte o de los profesionales que le prestan su asistencia

técnica (STC 172/1991, de 16 de septiembre, FJ 2º). La determinación de los supuestos en que cabe un recurso constituye, como regla general, una cuestión de legalidad que, en última instancia, debe ser resuelta por el Tribunal competente” (STC 79/2004, de 5 de mayo).

La STC 27/2019, de 26 de febrero ha hecho referencia a este respecto mencionando que para que se entienda cumplido el requisito de agotamiento de la vía jurisdiccional previa dirigido a garantizar la subsidiariedad del recurso de amparo, será necesario que haya concluido el proceso en sí mismo, de manera que si el demandante tienen posibilidad de plantear la vulneración del derecho fundamental ante cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria y de que esa vulneración sea apreciada y reparada por los mismos no podrá entenderse cumplido tal requisito, es decir, “no se trata propiamente del agotamiento de los concretos recursos previstos procesalmente contra la resolución cuestionada en sí misma considerada, sino de la visión en su conjunto del proceso judicial previo, para descartar que en su seno quepa aún el planteamiento y reparación de la supuesta vulneración; por lo que el respeto a la naturaleza subsidiaria del amparo exige que se espere a que el proceso finalice por decisión firme sobre su fondo, lo que conlleva inevitablemente asumir una cierta dilación en el pronunciamiento sobre tales contenidos” (STC 130/2018, FJ 4º). Con todo ello el Tribunal estableció una regla general “la inadmisibilidad de las pretensiones de amparo planteadas en procesos penales no concluidos”, aunque dicha regla pueda presentar excepciones (STC 27/2019).

Por último, se entenderá agotada la vía jurisdiccional aunque haya pendiente un recurso de aclaración o rectificación. La STC 304/1993 ya estableció en su momento que la presentación del recurso de aclaración y rectificación no hace inviable la presentación del recurso de amparo por considerarlo prematuro o contrario al principio de subsidiariedad¹⁷. En este mismo sentido la STC 11/2008, de 21 de enero, la cual trae causa de un recurso de amparo por su supuesto semejante al anterior, confirma lo establecido por la sentencia anteriormente mencionada.

¹⁷ STC 304/1993, de 25 de octubre, FJ 5º “el recurso de aclaración interpuesto en paralelo con el presente recurso, cuya existencia por cierto fue puesta en conocimiento de este Tribunal por los demandantes de amparo mediante un escrito posterior a la demanda, no hace inviable a la solicitud de amparo, pues lo cierto es que el recurso fue resuelto más tarde y la parte demandante de amparo presentó un nuevo escrito poniendo en conocimiento del Tribunal el Auto de aclaración dictado al efecto, escrito en el que daba por reproducidas las anteriores alegaciones del escrito de demanda. El amparo no puede, por ello, conceptuarse como prematuro o contrario al principio de subsidiariedad”

3.2.2 Acción u omisión del órgano judicial como causa directa e inmediata de la lesión.

El legislador ha querido destacar que el objeto de decisión en este caso es la actuación lesiva de derechos fundamentales por parte del órgano judicial y no los elementos que dieron lugar al proceso. Se distinguen dos tipos de hechos, por un lado los que dieron lugar al proceso, los cuales no pueden ser revisados en amparo y las acciones u omisiones producidas por el órgano judicial en el curso del proceso, recurribles a través del recurso de amparo (art. 44.1 b. LOTC).

El Tribunal Constitucional recuerda en la STC 38/2011, de 28 de marzo, FJ 4º que es doctrina reiterada de este Tribunal que no es su función revisar la interpretación de la legalidad efectuada por los Tribunales ordinarios en el ejercicio de su función jurisdiccional atribuida por el art. 117.3 CE, sin que únicamente les corresponde “controlar que la motivación judicial no resulte irrazonable, arbitrario o incurra en error manifiesto”. Por ello, para que pueda considerarse que la resolución judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el razonamiento en el que se basa deberá incurrir en “tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente”.

Por otro lado, la STC 184/2007, de 10 de septiembre, en cuanto a la no revisión de los hechos por el Tribunal Constitucional ha recordado que “la desigualdad en la aplicación judicial de la Ley que este Tribunal puede controlar es únicamente la que resulta de la diferencia en la interpretación de las normas, no la que se origina en la valoración de los hechos”. Esto se debe a que la función que se ha atribuido al Tribunal Constitucional es la de modificar y reparar la vulneración de la igualdad en la aplicación de la Ley y “no la de revisar la interpretación y calificación de los hechos efectuada por el Juez ordinario. En suma [...] el juicio de igualdad en la aplicación de la Ley está circunscrito al ámbito normativo, a las desigualdades surgidas de la interpretación y aplicación de la norma, y no se extiende, por tanto, a la apreciación de los hechos”.

3.2.3 Previa invocación formal en el proceso.

Será siempre necesario haber invocado previamente, en las vías judiciales ordinarias, el derecho fundamental que se entiende vulnerado, tal y como establece el art. 44.1 c) LOTC, siempre que hubiera habido ocasión para ello.

Así, la STC 8/2017 ha recordado en su FJ 2º que es “requisito indispensable” en virtud del art. 44.1 c) LOTC que se haya invocado, en este caso en el recurso de casación, la vulneración del derecho fundamental producida por la sentencia contra la que se interpuso el mismo, para dar oportunidad al Tribunal Supremo para pronunciarse al respecto¹⁸.

Este requisito tiene una doble finalidad. En primer lugar, con él se trata de otorgar a los tribunales ordinarios la posibilidad de pronunciarse sobre la mencionada vulneración de un derecho fundamental, para proceder en su caso a su restablecimiento. Y por otro lado, a través del mismo se preserva el carácter subsidiario del amparo, el cual se vería desvirtuado si se presentaran ante el Tribunal Constitucional cuestiones sobre las que no hayan tenido los tribunales ordinarios la oportunidad de pronunciarse. Es decir, se trata de evitar la alteración de las funciones atribuidas a los tribunales ordinarios, así como al Tribunal Constitucional (ATC 77/2015).

La falta de invocación de este requisito en el proceso ordinario es “un motivo de inadmisión de carácter insubsanable” (ATC 18/1980, de 24 de septiembre).

3.3 Aspectos formales del trámite de admisión.

La consecuencia derivada del incumplimiento de cualquiera de los requisitos formales recogidos en el art. 49 LOTC es que las Secretarías de Justicia deberán ponerlo en conocimiento del interesado en el plazo de 10 días, advirtiéndole de que en caso no subsanarse dicho defecto en el plazo de 10 días se inadmitirá el recurso¹⁹.

Las secciones serán las encargadas de comprobar que el demandante de amparo posee legitimación para la interposición de la demanda, que se han agotado todos los mecanismos previos previstos para la reparación de posibles lesiones de derechos o

¹⁸ La STC 8/2017 ha recordado la importancia de invocar la vulneración del derecho fundamental en el proceso de la siguiente manera: “para que pueden examinarse los motivos que integran la demanda de amparo es requisito indispensable, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que las vulneraciones de los derechos fundamentales se hayan invocado, por lo que al caso examinado se refiere, en el recurso de casación interpuesto contra aquella primera sentencia, dando así ocasión al Tribunal Supremo para pronunciarse sobre ellas. Sólo de este modo quedaría preservado el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional”.

¹⁹ Artículo 49.4 LOTC: “De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso”.

libertades fundamentales, que la demanda se ha interpuesto dentro del plazo establecido para ello y, por último, que cumple con las exigencias anteriormente mencionadas (art. 48 LOTC).

Por otro lado, con la reforma se ha modificado el sistema de mayorías para la admisión del recurso. En este sentido, frente a la mayoría de la Sección que anteriormente podía acordar su admisión, ahora se hace necesaria la unanimidad de los miembros que la compongan. Si se da el caso de obtenerse mayoría, pero no unanimidad, la decisión se traslada a la Sala, que deberá decidir por mayoría. Con este sistema de mayorías se pretende reforzar el sistema de admisión del recurso, exigiéndose mayorías más cualificadas para la admisión de las demandas. Por el contrario, la inadmisión requiere únicamente que concurra la voluntad de la mayoría.

La declaración de inadmisión del recurso de amparo se adopta por las Secciones o las Salas mediante providencia que, con carácter general, no precisa motivación, puesto que la Ley Orgánica exige tan sólo que en aquella se indiquen los criterios que se han incumplido. Por otro lado, cuando la decisión de inadmisión sea recurrida en súplica por el Ministerio Fiscal, único legitimado para impugnar la misma, su resolución se hará mediante auto motivado por parte del Tribunal Constitucional. Así resulta de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conforme al cual “Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna”.

Esta regulación ha sido criticada por la doctrina, que estima que el Tribunal Constitucional actúa como un órgano judicial y, por ello, se encuentra sujeto a la obligación de motivar sus resoluciones²⁰, deber que deriva del derecho a la tutela judicial

²⁰ MATIA PORTILLA, F.J. “La trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 86, 2009. Pág. 360. El autor ha señalado, que a su entender, tal obligación de motivar las resoluciones por parte del Tribunal Constitucional podría pensarse que sólo opera respecto de aquellas que se publiquen en el BOE, es decir, sentencias y determinados autos y que las providencias no se encuentran incluidas ya que únicamente se trasladan al demandante y al Ministerio Fiscal. Sin embargo, “tal conclusión sería errónea por diversas razones. En primer lugar, porque el justiciable tiene un derecho (fundamental) a obtener una respuesta motivada. En segundo lugar, porque, además de una exigencia subjetiva del recurrente, la motivación es un elemento objetivo esencial del procedimiento ya que, solamente motivando la providencia, el Fiscal podrá conocer los argumentos del Tribunal y resolver si debe, o no, interponer un recurso de súplica contra la misma. Esta obligación de motivar las providencias no solamente es precisa en el plano interno. También es imprescindible desde la perspectiva del derecho al proceso debido del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es conveniente recordar que el Tribunal de Estrasburgo puede enjuiciar si una providencia de inadmisión

efectiva de las partes (art. 24.1 CE) y que constituye una de las garantías esenciales del procedimiento. Hay que tener en cuenta el art. 208 LEC que establece que las providencias “incluirán una sucinta motivación...” y el art. 248 LOPJ que en el mismo sentido establece que las providencias “podrán ser sucintamente motivadas...”. Sin embargo, el art. 50.3 LOTC al hacer referencia a la inadmisión mediante providencia establece únicamente la obligación de precisar el requisito incumplido, pero no su motivación. Por ello, no se entiende que el Tribunal Constitucional no deba seguir la misma línea argumental de la LEC y la LOPJ y realizar un esfuerzo para razonar y explicar, aunque sea brevemente, porque considera incumplido alguno de los requisitos formales de conformidad con el art. 50.3 LOTC, siendo insuficiente la sola mención del incumplimiento del mismo. Padrós Reig por su parte, considera que el Tribunal Constitucional debería procurar mejorar la explicación de las causas de inadmisión, ya que todavía las providencias de inadmisión continúan siendo escuetas a este respecto²¹.

Como ya hemos visto, la LOTC permite realizar la inadmisión mediante providencia sin justificar y explicar las causas que le llevan a tomar esa decisión, salvo en el caso previsto en el art. 50.1 b) LOTC, es decir cuando, “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”. Es decir, cuando el requisito incumplido sea la especial trascendencia constitucional será necesario que la decisión de inadmisión tomada por el Tribunal sea motivada.

La inadmisión se podrá acordar en dos momentos procesales; en primer lugar en la fase de admisión, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 50 LOTC y conexos; y en segundo lugar, en la Sentencia, bien como decisión a la vista de las alegaciones, bien de oficio, al comprobar el incumplimiento de los requisitos exigidos²².

de un recurso de amparo lesiona el mentado derecho subjetivo de los justiciables. Tal posibilidad no es hipotética, sino que se ha concretado ya en la difundida Sentencia de la Sección quinta del TEDH Fuente Ariza contra España (demanda 3321/04, Sentencia de 8 de noviembre de 2007)”.

²¹ PADRÓS REIG, C. “La exigua tasa de admisión del recurso de amparo constitucional”. *Revista de Administración Pública*, núm. 209, 2019, pág. 344.

²² La doctrina constitucional que ha fijado esta afirmación es la siguiente: 28/2011, 44/2011, 111/2011, 89/2011, 126/2011, 174/2011, 168/2012, 242/2015, 154/2016, 38/2018; 129/2018, 131/2018, 11/2019; 15/2019, entre otras muchas otras.

4. ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL.

4.1 Caracterización general.

La incorporación del requisito de admisión consistente en la necesidad de justificar y acreditar la trascendencia objetiva del recurso de amparo constituye la principal modificación del régimen de admisión introducida por la Ley Orgánica 6/2007.

Las notas más características de este requisito en su actual configuración legal pueden resumirse en las siguientes.

En primer lugar, debe señalarse que el requisito se predica del recurso de amparo en sí, no de las pretensiones articuladas a través del mismo (arts. 49.1 in fine y 50.1 b) LOTC).

Por otro lado, constituye un requisito positivo de admisión ya que se exige su acreditación o justificación efectiva por el demandante de amparo (arts. 50.1 a) y b) LOTC). Por ello, su planteamiento y justificación en la demanda debe quedar debidamente diferenciado de la exposición de los motivos por los cuales se considera vulnerado el derecho fundamental de que se trate; dicho de otro modo, la especial trascendencia constitucional del amparo y la existencia de la lesión a un derecho fundamental constituyen cuestiones distintas, necesitadas de una justificación también específica o independiente en la demanda²³.

En relación con este requisito deben distinguirse, a su vez, dos aspectos, como son, por un lado, la justificación formal del mismo, que constituye una carga procesal del demandante (arts. 49.1 y 50.1 a. LOTC), y, por otro, la existencia real, efectiva y acreditada de la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 50.1 b) LOTC), cuya apreciación se reserva en exclusiva al Tribunal Constitucional, como este último ha venido recordando.

²³ En cuanto a la cuestión de que la justificación de la vulneración del derecho fundamental y el requisito de la especial trascendencia constitucional son cuestiones diferentes y por lo tanto ambas deberán quedar debidamente justificadas por separado, la STC 17/2011, de 28 de febrero ha señalado que es necesario que “en la demanda se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental, que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo, y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional”. Además, la justificación de la vulneración del derecho fundamental no sustituye la necesidad de justificar la especial trascendencia constitucional, “la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental no puede suplir la omisión de una argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo” (ATC 252/2009, de 19 de octubre).

En todo caso, y de modo general, debe señalarse que el contenido material de la especial trascendencia constitucional se vincula con la justificación y necesidad de un pronunciamiento de fondo por parte del Tribunal Constitucional.

En último lugar, la reforma legal examinada se caracteriza por realizar una definición especialmente amplia o genérica, y, por tanto, no cerrada, de los supuestos en que se concreta la especial trascendencia constitucional, lo que ha precisado una labor de desarrollo e interpretación de la norma llevada a cabo principalmente a través de la STC 155/2009, de 25 de junio, que posteriormente analizamos.

4.2 Dimensión formal.

El artículo 49.1 in fine LOTC establece que “en todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”, expresando así la carga procesal que asume el demandante de argumentar no sólo los motivos por los que considera que le han sido vulnerados uno o varios derechos fundamentales, sino también las razones por las que el recurso interpuesto exige o justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional y que, por lo tanto, la demanda debería admitirse a trámite. De esta forma se ha establecido un sistema en el que los ciudadanos deben contribuir en la determinación de aquellos asuntos que merecen el estudio por parte del Tribunal Constitucional.

Este requisito es de obligado cumplimiento, ya que su omisión constituye un vicio insubsanable²⁴.

Por otro lado, en su STC 128/2014, de 21 julio, FJ 2º c. realizó una labor de recopilación de la doctrina constitucional existente hasta esa fecha sobre el alcance de esta exigencia, señalando que:

Las demandas de amparo para ser admitidas a trámite deberán cumplir esta obligación, aunque no tienen que adaptarse a un modelo rígido. Deberán responder a los “cánones propios de este tipo de escritos procesales”²⁵ y “tener en cuenta las precisiones que, con relación a esa específica carga, ha ido efectuando este Tribunal a través de

²⁴ El ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3º, señala que la justificación de la especial trascendencia constitucional ha de entenderse como un “presupuesto insubsanable para la correcta formalización del recurso de amparo, cuya falta determina la inadmisión”.

²⁵ STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2º.

diversas resoluciones que despejan las posibles dudas sobre el modo en el que se tiene que hacer efectiva”²⁶. Por ello, no basta con razonar la presunta existencia de la vulneración de un derecho fundamental²⁷. Además, es importante que en la demanda se diferencie claramente entre la argumentación destinada a probar que se ha vulnerado un derecho fundamental, ya que a pesar de la reforma sigue siendo un requisito inexcusable, y los razonamientos tendentes a demostrar que dicho recurso tiene especial trascendencia constitucional²⁸. Sin embargo, la justificación de la existencia de la lesión del derecho fundamental “no puede suplir la omisión de una argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo”²⁹. Tampoco será suficiente para cumplir este requisito que en la demanda de amparo se haga una breve referencia o mención a la especial trascendencia constitucional, sin un esfuerzo argumentativo por parte del recurrente destinado a probar su existencia y que permita evidenciar “por qué el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en atención a su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución o para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”³⁰. Es decir, a pesar de deberse diferenciar claramente entre la argumentación tendente a justificar la existencia de la lesión del derecho fundamental y la relativa a justificar la existencia de especial trascendencia constitucional, ambas son necesarias, de manera que la justificación de una de ellas no puede suplir la justificación de la otra, ya que entonces la demanda correría el riesgo de ser inadmitida”³¹.

En los últimos años ha existido por parte de la jurisprudencia una tendencia más flexible a la hora de interpretar la especial trascendencia constitucional, de manera que no era necesario dedicar por los recurrentes un apartado específico a su justificación para que dicho requisito pudiera ser entendido como cumplido o incluso la no necesidad de utilizar el término “especial trascendencia constitucional”. Sin embargo, esta tendencia no se ha propagado respecto de la carga que posee el recurrente para explicar las razones

²⁶ STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3º.

²⁷ A este respecto hacen referencia otras sentencias como: SSTC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3º; 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2º; y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3º; también AATC 186/2010, de 29 de noviembre, FJ único; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2º; 290/2008, de 22 de septiembre, FJ 2º; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2º y 188/2008, de 21 de julio, FJ 2º.

²⁸ STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2º.

²⁹ ATC 252/2009, de 19 de octubre, FJ 1º.

³⁰ STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3º, citando el ATC 187/2010, de 29 de noviembre, FJ único.

³¹ ATC 252/2009, de 19 de octubre, FJ 1º.

que justifican la proyección objetiva del recurso en el sentido de la STC 155/2009³². El Tribunal por su parte, continúa argumentando que esta flexibilización de la obligación de justificar la especial trascendencia constitucional ni es absoluta ni puede llevar a apreciar de oficio un recurso cuando no esté debidamente justificada³³.

Esta exigencia se encuentra vinculada con la necesidad del Tribunal de justificar las causas de inadmisión de los recursos, diferenciando entre falta de justificación, cuando no se haga referencia alguna a la trascendencia objetiva del recurso e insuficiencia de justificación, cuando la argumentación se limite a repetir la lesión alegada.

No obstante, la aplicación de este requisito en su vertiente formal no ha estado exenta de discrepancias en el seno del propio Tribunal Constitucional. El voto particular formulado al ATC 28/2013, por el magistrado Valdés Dal-ré muestra su disconformidad con la fundamentación y el fallo de la resolución, al entender que el Tribunal Constitucional incurre en “excesivo formalismo” en la valoración del cumplimiento de la exigencia de justificar la especial trascendencia constitucional, es decir, la carga procesal que posee el demandante.

La demandante en el recurso de amparo resuelto mediante el mencionado auto alegaba que se había vulnerado su derecho a tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al entender que se le había producido indefensión. El Tribunal Constitucional, en su FJ 2º

³² Tras los primeros años de la reforma, se hacía una interpretación formalista de la especial trascendencia constitucional, de manera que se exigía a los recurrentes, a parte de la argumentación de la trascendencia objetiva del recurso, que tal argumentación se hiciera en un apartado específico destinado a justificar de su existencia, haciendo mención explícita del término “especial trascendencia constitucional”. Esto puede observarse en los AATC 183/2009, 187/2009 y 283/2009. Sin embargo, con el paso del tiempo este criterio formalista se ha ido flexibilizando y a este respecto podemos observar las SSTC 118/2014 y 176/2012.

³³ GONZÁLEZ BEILFUSS, M. “La especial trascendencia constitucional de las demandas de amparo. Análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre un concepto etéreo”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 107, 2016, págs. 351 y 352. El autor ha este respecto a matizado que dicha flexibilización de la dimensión formal de la especial trascendencia constitucional “no ha hecho desaparecer los problemas de inseguridad jurídica de los primeros años. Lo que constituya, en efecto, ‘un esfuerzo argumental razonable’ para justificarla sigue siendo un juicio de suficiencia de contenido incierto y en no pocos casos discutible”; igualmente ha señalado que “al margen de ello, el análisis de la aplicación de este requisito formal pone de relieve que la influencia de la dimensión material de la especial trascendencia constitucional y, sobre todo, de la verosimilitud de la lesión aducida es muy importante en la práctica. (...) Lo que en algún pronunciamiento inicial constituyó un argumento adicional para inadmitir un recurso (la lesión deducida era inverosímil), se ha convertido en un criterio de decisión material que lleva al Tribunal Constitucional a admitir a trámite recursos en los que la justificación de la trascendencia constitucional es deficiente. Solo de este modo, en efecto, cabe interpretar algunos pronunciamientos del Tribunal que aprecian sin apenas motivación la especial trascendencia constitucional de la demanda cuando de los antecedentes se desprende que apenas había sido justificada por el recurrente, o que relajan el nivel de exigencia cuando se está ante una lesión más verosímil e importante”. Por último ha comentado, que a pesar de que en España, ha diferencia de Alemania la especial trascendencia constitucional debe desvincularse de la entidad o gravedad de la lesión producida a un derecho fundamental, en la práctica la trascendencia objetiva del recurso se encuentra vinculada a la verosimilitud de la lesión aducida en la demanda.

del referido auto, manifestaba que la demanda carecía de justificación respecto de la especial trascendencia constitucional indicando que : “(d)e lo expuesto se desprende que la locución 'trascendencia constitucional del referido desajuste' es utilizada, no a los efectos de argumentar la proyección objetiva del recurso interpuesto (...) sino para razonar la existencia de vulneración de un derecho”.

El magistrado discrepante coincide con esta afirmación; sin embargo, en su opinión la inadmisión por falta de justificación de dicho requisito en este caso “revela un juicio en exceso formalista” en la medida en que no se ha vulnerado el requisito de apreciación de la especial trascendencia constitucional, sino su justificación y considerando que el TC es quien debe actuar como garante de este tipo de derechos “cualquier interpretación que soslaye esta función preferente de protección, haciendo prioritarias otras hasta convertir aquélla en accesoria o por completo condicionada por éstas, se aleja del mandato constitucional”.

Menciona, a pesar de ello, que todo lo anterior no debe entenderse como una oposición a la reforma. El voto se opone a “una interpretación de la reforma legal de 2007 -o a otras posteriores- que termine convirtiendo al amparo, de facto, en un proceso en el que la tutela subjetiva sea residual”, de manera que dicho requisito debe darse por satisfecho “si del conjunto de los razonamientos en la demanda se infiere aquélla, incluso cuando el recurso la plasme de manera asistemática”.

En el fallo del Auto 28/2013 se puede observar un “excesivo formalismo” en la valoración que hace el Tribunal Constitucional sobre el cumplimiento de la carga procesal que tiene el demandante de justificar de la especial trascendencia constitucional, en contraposición con otros supuestos en los que se inclina por una interpretación más flexible en las líneas de la interpretación realizada por el magistrado Valdés Dal-Ré.

Así, en la STC 31/2013, de 11 de febrero, FJ 2º, se puede observar claramente una flexibilización del requisito: “el demandante conecta materialmente en su demanda la alegada lesión con diversos criterios, que conforme a lo ya expuesto en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2º, dotaría de trascendencia al recurso. En tal sentido puede indicarse que el asunto suscitado, trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión, que afecta a la extradición como acto de soberanía del Estado”.

Por su parte, en la STC 89/2014, de 9 de junio se rechaza la ausencia del requisito de justificación alegada tanto por el Abogado del Estado, como por el Ministerio Fiscal, quienes entendían que el demandante únicamente denunció la vulneración de sus derechos. El Tribunal Constitucional afirmó lo siguiente: “Ciertamente, debe reconocerse que el demandante no ha explicado de la mejor manera posible la eventual trascendencia constitucional del recurso sometido a nuestro enjuiciamiento. Sin embargo, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el recurrente ha realizado el esfuerzo argumental que le es exigible, pues no sólo refleja una argumentación limitada a la lesión del derecho fundamental y a sus consecuencias, sino que, al menos implícitamente, intenta poner de manifiesto que la especial trascendencia constitucional radica en el contraste de la resolución judicial impugnada con la doctrina que este Tribunal estableció en la STC 198/1999, de 25 de octubre (...) lo que podría haber llevado a este Tribunal Constitucional a un proceso de reflexión interno dirigido a un posible cambio de doctrina [supuesto previsto en la letra b), fundamento jurídico 2º, de la STC 155/2009, de 25 de junio]. Con estos antecedentes, se puede entender que la parte recurrente ha cumplimentado la expresada carga, al argumentar de manera implícita sobre la proyección objetiva del amparo solicitado”.

En este caso el Tribunal se refiere directamente al “intento” que realiza el demandante por cumplir con la exigencia de justificar la especial trascendencia constitucional, carga que el demandante en todo caso, cumple de forma “implícita”³⁴.

En definitiva, y aun constituyendo una exigencia formal de carácter insubsanable, la necesidad de cumplir en la demanda de amparo con el deber de razonar y justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, la evolución de la jurisprudencia emanada del propio Tribunal Constitucional refleja un cierto grado de flexibilización en el rigor que se impone a la observancia de esta carga procesal, que varía también en función de cuál sea el concreto supuesto (de los señalados en la sentencia 155/2009) en que justifica el demandante la admisión del recurso.

³⁴ MONTESINOS PADILLA, C. “Tutela multinivel de los derechos: Obstáculos procesales”. Tesis doctoral, Getafe, 2015. Págs. 106-117.

4.3 Dimensión material.

La dimensión material o de fondo de la especial trascendencia constitucional establecida en el art. 50.1 b) LOTC se ha constituido como el elemento más distintivo o novedoso de la nueva regulación del amparo³⁵.

La existencia del requisito de la lesión subjetiva del derecho o libertad fundamental sigue siendo presupuesto inherente a la demanda, hasta el punto de que si en la misma se aprecia su inexistencia, podría ser inadmitida sin entrar a comprobar la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional³⁶. Por otra parte, como advierte en su ATC 29/2011, de 17 de marzo, FJ 2º, la apreciación de un perjuicio grave de un derecho fundamental, no conlleva que la demanda posea especial trascendencia constitucional, es decir, la lesión del derecho fundamental constituye un prerequisite de admisión de la demanda, pero la gravedad del mismo no justifica la necesidad de decisión sobre el fondo por el Tribunal.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional es quién posee el monopolio en exclusiva sobre este requisito. Es decir, es el dueño de este concepto y quién lo administra, al igual que los supuestos recogidos en la STC 155/2009, de 24 de mayo, FJ 2º.

La reforma 6/2007, de 24 de mayo, refuerza, como hemos visto, la dimensión objetiva del recurso y mantiene su carácter reglado. Con ella el Tribunal pretendía “avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC”. Sin embargo, en la práctica la admisión no parecería responder a otra cosa que a la discrecionalidad del Tribunal. El refuerzo de la dimensión objetiva del recurso además de ser necesaria debido

³⁵ ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3º: “En cualquier proceso jurisdiccional, la subsanación de defectos de la demanda que le da origen puede referirse a requisitos formales, como la aportación de documentos o la consignación de determinados datos, pero no es posible extenderla al contenido de las alegaciones que sustentan aquella pretensión, porque constituyen su sustrato material y ello trastocaría los principios generales del proceso y las garantías de su seguridad jurídica, que quedarían gravemente dañados si se abriera la posibilidad de que las argumentaciones que habrían de conducir a la misma admisión a trámite pudieran ser introducidas *ex novo* posteriormente a la presentación de la demanda. Y ello aún con mayor motivo en el actual recurso de amparo dados el significado y cometido que le otorga la nueva regulación legal, que tiene como característica más distintiva la necesidad de que exista una “especial trascendencia constitucional” en el asunto planteado para que este Tribunal pueda conocer del mismo”.

³⁶ ATC 272/2009, de 26 de noviembre, FJ 2º: “si en el examen liminar de la demanda y de los documentos unidos a ella se apreciara una manifiesta falta de apariencia de lesión en las quejas aducidas, ello excluiría por sí mismo la justificación de una resolución sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional y determinaría la inadmisión del recurso de amparo por ausencia de especial trascendencia constitucional ex art. 50.1.b) LOTC, haciendo innecesario, al tratarse de exigencias acumulativas, interrogarse acerca de la concurrencia en el recurso de una especial trascendencia constitucional a la vista de los criterios previstos en el citado precepto”.

a la gran carga de trabajo que tenía que soportar el TC, trata de proporcionar una protección más efectiva de los derechos fundamentales. Esta posibilidad, según Montesinos Padilla, depende de la tutela proporcionada por los jueces y tribunales, así como de la actitud adoptada por el propio Tribunal Constitucional³⁷.

Hay que recordar que en España, en contraposición con el sistema Alemán, no cabe admitir una demanda de amparo únicamente por que la lesión producida a un derecho fundamental se entienda ser grave o muy grave³⁸. Esto se debe a que en el momento en el que se tramitó la reforma de la LOTC no prosperó la enmienda nº 27 presentada por el Grupo Parlamentaria Vasco con la finalidad de introducir como supuesto excepcional y alternativo a la especial trascendencia constitucional, “el perjuicio particularmente grave” que la negación de una decisión sobre el fondo del asunto planteado pudiera provocar al recurrente³⁹. Con ello se trataba de buscar un equilibrio entre la dimensión objetiva y subjetiva del recurso.

Además, tanto el magistrado Valdés Dal-Ré, como la doctrina constitucional, han reivindicado la dimensión subjetiva del recurso de amparo al entender que la objetivación del mismo, operada tras la reforma, tenía el propósito de menospreciar la dimensión subjetiva, por carecer de lugar en el art. 53.2 CE⁴⁰. Por su parte el art. 50.1 b) LOTC no ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad y el voto particular formulado al ATC

³⁷ MONTESINOS PADILLA, C. “Tutela multinivel de los derechos: Obstáculos procesales”. Tesis doctoral, Getafe, 2015. Págs. 118-122.

³⁸ El art. 93. A.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal Alemán requiere especial trascendencia constitucional del recurso de amparo para su admisión a trámite; sin embargo, de modo excepcional, admite a trámite un recurso de amparo “cuando resulte para el recurrente un perjuicio especialmente grave a causa de la negativa a conocer sobre el fondo”. En el sistema español, el Tribunal Constitucional ha recordado que aunque resulte verosímil la existencia de lesión subjetiva del derecho fundamental, sea cual sea la gravedad de la misma, no se admitirá el recurso (ATC 29/2011).

³⁹ La enmienda trataba de equilibrar la dimensión objetiva y la subjetiva del recurso de amparo, BOCG, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A, núm 60-7, de 23 de febrero de 2006, p. 33.

⁴⁰ FERNÁNDEZ FARRERES, G. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”, en M. Carrillo (Coord.), *Hacia una nueva jurisdicción constitucional (Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC*, Tiran lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 147-149. El autor ha señalado que el término “recurso” del art. 53.2 CE hace referencia a la protección subjetiva de los derechos fundamentales y no a la dimensión objetiva del recurso. GARRORENA MORALES, A. “La Ley Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica”, en M. Carrillo (Coord.), *Hacia una nueva jurisdicción constitucional (Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC*, Tiran lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 228-260. El autor por su parte, ha comentado que la mencionada reforma no solamente ha introducido un fuerte elemento objetivo, sino la objetivación total del recurso de amparo, que no da opción para las exigencias de una concepción subjetiva.

28/2013⁴¹ tiene lugar posteriormente a la STC 155/2009, en la cual se desarrollan los supuestos de especial trascendencia constitucional que el recurrente debe explicitar.

El carácter abierto e indeterminado de la “especial trascendencia constitucional”, otorgaba el Tribunal un amplio margen de decisión para estimar o desestimar los recursos y los operadores jurídicos tenían que hacer su propia interpretación de los preceptos para poder satisfacer la exigencia del requisito. Surge así la necesidad de perfilar el significado y contenido de la especial trascendencia constitucional. Esta tarea se llevó a cabo por el propio Tribunal. La STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2º, establece un elenco no cerrado de supuestos en los concurre el mencionado requisito, de conformidad con el carácter dinámico del ejercicio de la jurisdicción constitucional y que estudiaremos a continuación.

La STC 155/2009, de 25 de junio, en su fundamento jurídico 2º ha señalado a este respecto que: “Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC. En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido”.

Transcurridos más de dos años desde la reforma, el Tribunal utilizó la resolución de un recurso de amparo para dar a conocer la doctrina general sobre los supuestos en los que cabe apreciarse la especial trascendencia constitucional. Así, en su FJ 2º, se pronunció

⁴¹ En el voto particular el magistrado comenta que “el recurso describe una compleja interpretación que alcanza a la prescripción del delito de robo de bebés en su concreta proyección sobre el derecho de acceso a la jurisdicción que integra el derecho a la tutela judicial efectiva (...). La recurrente trasciende el caso concreto tanto cuando argumenta en general sobre los conceptos de delito permanente y prescripción, como cuando lo hace sobre su proyección al delito concreto que en su caso considera cometido, momento en el que lejos de detenerse en la lesión singular, hace planteamientos globales. La mejor prueba de ello está en sus páginas 10 y 11, en las que en tres ordinales se formula una tesis sobre la imprescriptibilidad de todos los delitos de sustracción de niños, fundada en la intención de los autores del delito de que su acto perdure en el tiempo, en los efectos permanentes de esa conducta voluntaria y en la posibilidad de paralización de esa situación ilícita que, sin embargo, no se produce”.

por primera vez sobre la dimensión material de este nuevo requisito. Esta Sentencia es el pronunciamiento más importante llevado a cabo por el Tribunal Constitucional. En ella hace tres importantes consideraciones; en primer lugar, recuerda que el requisito de la especial trascendencia constitucional fruto de la reforma, debido a la necesidad de una nueva configuración del amparo, no suprime la finalidad fundamental del mismo, la “tutela de derechos fundamentales”. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional expresa que sólo a él le corresponde “un amplio margen decisorio para estimar cuándo el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en atención a su especial trascendencia constitucional”. Por último, reconoce que “no cabe descartar la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno”.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de modificar los supuestos, no conlleva que el tribunal pueda interpretar su propia doctrina de forma que se aleje de ella y que no garantice certidumbre y seguridad jurídica.

5. SUPUESTOS DE ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL (STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO).

5.1 Nueva faceta de un derecho fundamental.

Este supuesto de especial trascendencia constitucional, recogido en el FJ 2º a. de la STC 155/2009, es uno de los más alegados en la práctica. A través de él, se posibilita la admisión de recursos de amparo en los que se planteen cuestiones sobre las que no existen antecedentes constitucionales. La invocación habitual o frecuente de este supuesto resulta lógica, dado que pese a que el Tribunal Constitucional, tras tantos años de actividad ha creado numerosa jurisprudencia en casi todas las materias, siempre surgen cuestiones nuevas sobre las que no ha tenido oportunidad de pronunciarse. El Tribunal Constitucional ha establecido que la ausencia de doctrina, para que pueda apreciarse este supuesto, se observa en el momento en el que se interpuso el recurso, no en el momento de su admisión o incluso en el de su resolución⁴². En este sentido, la STC 139/2015, de 22 de junio, se resuelve por remisión a la doctrina fijada en la STC 7/2015, de 22 de enero. Según Beladiez Rojo, “a pesar de lo paradójico que puede resultar que el Tribunal admita un recurso por considerar que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea una cuestión nueva y resuelva ese asunto dictando una sentencia de aplicación de doctrina, esta situación puede explicarse porque, quizás, el momento que el Tribunal tomó en consideración para apreciar si la cuestión planteada en el recurso era nueva, no fuera el momento de la admisión a trámite (fecha en la que existía doctrina sobre la cuestión suscitada), sino cuando se interpuso la demanda (8 de junio de 2012)⁴³”.

Nos podemos encontrar ante un supuesto nuevo, bien por ser un problema constitucional nuevo (un caso nuevo desde una perspectiva constitucional)⁴⁴ como se

⁴² STC 56/2013, de 11 de marzo.

⁴³ BELADÍEZ ROJO, M. *La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales. XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018 Pág. 37.

⁴⁴ Algunos supuestos en los que el Tribunal Constitucional aprecia esta causa de especial trascendencia constitucional por tratarse de un caso nuevo sobre el que no existe doctrina son: STC 58/2010 sobre las condiciones que deben reunir en el ámbito de la jurisdicción ordinaria los actos de comunicación procesal realizados mediante fax para que sean compatibles con el derecho de tutela judicial efectiva; STC 122/2013 sobre procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de que sea negativa la notificación y el requerimiento de pago en el domicilio que consta en el Registro de la Propiedad y la necesidad de que el órgano jurisdiccional agote las posibilidades de averiguar el domicilio real antes de acudir a la comunicación por edictos; STC 125/2013 en la cual el Tribunal Constitucional determina la imposibilidad

observa en la STC 70/2009 sobre jubilación permanente con base en informes médicos no consentidos ni emitidos por el afectado (art. 18.1 CE); o bien por ser un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrinal del Tribunal Constitucional por provenir de una reciente modificación legislativa como se observa en la STC 165/2011 sobre la posibilidad de subsanación del requisito de presentación de avales a los candidatos de los partidos políticos con ocasión de la reforma del art. 169.3 LOREG sobre el porcentaje de avales que hay que presentar (art. 23.2 CE)⁴⁵.

Cuando se trate de un problema constitucional nuevo se exigirá a su vez, distinguir los casos en los que existe un asunto constitucional nuevo, de aquellos en los que la novedad radica en el supuesto de hecho planteado; de entrada parece que la novedad deberá observarse en el contenido del derecho fundamental del cual se pretende el amparo, no cuando, aun siendo original o singular el caso sobre el que se plantea el debate, el derecho fundamental o faceta del mismo relevante para su resolución ha sido objeto de previa doctrina del Tribunal Constitucional. Es decir, se trata de identificar la nueva faceta de un derecho fundamental con un nuevo caso desde una perspectiva constitucional, no una casuística nueva que nunca haya llegado al TC. Sin embargo, ha hecho una interpretación amplia de este supuesto al considerar que no hace falta que no exista doctrina constitucional sobre el derecho fundamental que se entiende vulnerado, sino que es suficiente con que la cuestión concreta que se expone sea nueva⁴⁶. Así, en ocasiones

de nombrar alcalde a un concejal que no haya concurrido en las listas de las elecciones ya que entiende que se vulneraría el derecho a participar en los asuntos públicos (ex art. 23.1 CE); STC 77/2015 sobre fiscalidad y las familias numerosas (ex art. 14 CE); STC 167/2015 sobre el emplazamiento mediante edictos en materia de violencia de género; SSTC 262/2015, 263/2015 y 222/2015 sobre la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva en relación con la alegada incompetencia del juez para contestar una cuestión prejudicial de inconstitucionalidad de una norma planteada por la parte. Se entiende que la decisión es irracional al tener que pronunciarse sobre la necesidad de cuestionar o no la norma de cuya validez depende el fallo - disposición adicional 5ª LOTC-; STC 112/2016 sobre el eventual conflicto que puede generar la interpretación y aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo con el derecho a la libertad de expresión.

⁴⁵ Los supuestos en los que el Tribunal Constitucional aprecia que concurre esta causa de especial trascendencia constitucional por un problema con un derecho fundamental susceptible de amparo por provenir de una reciente modificación legislativa son: STC 124/2011 sobre el alcance de la inalterabilidad de la papeleta tras la reforma del art. 96.2 LOREG operada por la LO 2/2011 (art. 23.2); STC 136/2017 sobre la reforma art. 197 Ley reguladora de la jurisdicción social; SSTC 147/2016; 115/2017; 126, 127 y 129/2017; 148/2017.

⁴⁶ GONZÁLEZ BEILFUSS, M. “La especial trascendencia constitucional de las demandas de amparo. Análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre un concepto etéreo”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 107, 2016, pág. 355. El autor ha comentado que en la STC 115/2013, de 9 de mayo el Tribunal Constitucional consideró como un supuesto nuevo “las condiciones que deben darse para que la policía pueda acceder a la agenda de un teléfono móvil” o la STC 29/2014, de 24 de febrero, “la posibilidad de sancionar al propietario de un vehículo por no identificar al conductor”. En estos supuestos el Tribunal entendió que había ausencia de doctrina constitucional recogido como supuesto a) en el FJ 2º

ha apreciado este supuesto de especial trascendencia constitucional en casos en los que no crea doctrina por no existir una previa, sino que aplica doctrina existente a supuestos de hecho con ausencia de precedente concreto⁴⁷. Es decir, la falta de precedente concreto puede apreciarse en supuestos similares a otros sobre los que el Tribunal Constitucional haya tenido ocasión de pronunciarse; pero como nunca dos casos son totalmente idénticos y siempre se pueden observar peculiaridades, el Tribunal Constitucional puede afirmar la existencia de un supuesto nuevo. Este criterio ofrece infinidad de opciones a este Tribunal para justificar la admisión de recursos que desee resolver por la gravedad de la lesión que se plantea, o por cualquier otra razón de fondo. Así, por ejemplo, la STC 154/2016, que trata sobre si en un supuesto de llegada de pateras cabe un recurso de *habeas corpus*, aprecia la existencia de especial trascendencia constitucional “porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.

Cabe mencionar, por último, que el Tribunal Constitucional en ocasiones no expone las razones por las que valora que no existe doctrina previa o cuál es la cuestión novedosa que ha de ser resuelta. Es decir, se limita a mencionar que concurre este supuesto de especial trascendencia constitucional, sin exponer los motivos por los cuales lo considera. En este sentido, podemos observar por ejemplo la STC 65/2015, de 13 de abril, FJ 2º, en la cual únicamente se indica que concurre este supuesto de especial trascendencia constitucional “porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”. En la actualidad el Tribunal Constitucional continúa en la misma línea en sentencias como STC 89/2020, de 20 de julio, en la cual, suscitándose la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva (art. 24 CE), así como el derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE) por haberse entendido en instancias anteriores que el sindicato no tenía acceso al proceso, únicamente se afirma en términos genéricos la concurrencia de este presupuesto: “... apreciamos que concurría la especial trascendencia constitucional exigida para la admisión a trámite del presente recurso, al plantearse en él un problema que afecta a una

STC 155/2009, al tratarse de supuestos nuevos, sobre los que no había jurisprudencia. Otro ejemplo puede ser la STC 8/2017, de 19 de enero, en la que el Tribunal Constitucional entendió que no existía doctrina constitucional por referirse el recurso a una faceta del derecho fundamental a la presunción de inocencia sobre el que no se había pronunciado previamente.

⁴⁷ Algunos ejemplos de sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha apreciado este supuesto de especial trascendencia constitucional, pero en la resolución del recurso el Tribunal más que crear doctrina, cambiarla o aclararla, aplica doctrina existente a supuestos que presentan elementos nuevos son las SSTC 2/2017, de 16 de enero; 11/2017, de 30 de enero o 38/2017, de 24 de abril, entre muchas otras.

faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2º a.]”⁴⁸.

En algunos casos, la propia lectura de la sentencia permite concluir de forma patente la inexistencia de doctrina constitucional previa; por ejemplo en la STC 11/2016, que trata sobre la incineración de los restos de un aborto, queda bastante claro por qué el TC aprecia la existencia de especial trascendencia constitucional por ausencia de doctrina. Sin embargo, en otras ocasiones no es tan fácil de identificar la admisión del recurso por este motivo y además puede resultar más discutible, por ejemplo, la STC 12/2016 que trata sobre la interrupción de la prescripción, cuestión que no parece que pueda plantear problemas constitucionales sobre las que no exista ya doctrina del Tribunal Constitucional.

5.2 Aclaración o cambio de doctrina por parte del Tribunal Constitucional.

Este supuesto de especial trascendencia constitucional se encuentra en gran medida relacionado con el anterior, por cuanto permite igualmente al TC establecer doctrina nueva. Sin embargo, en este caso, a diferencia del anterior, la doctrina nueva es consecuencia de un proceso de revisión del Tribunal Constitucional, bien para cambiarla, matizarla o aclararla. Dentro de este caso podemos diferenciar tres supuestos, que de ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna, por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o por un cambio en la doctrina de los órganos encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE.

Según la sentencia 155/2009, existen varias razones que pueden llevar al TC a revisar su doctrina: “como consecuencia de un proceso de reflexión interna [...], o por el surgimiento de nuevas realidad sociales o de cambios normativos relevantes para la

⁴⁸ En el mismo sentido la STC 74/2020, de 29 de junio “acordó admitir a trámite el recurso, apreciando especial trascendencia constitucional, porque el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no había doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2º a.]”.

configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE”.

La propia sentencia anteriormente mencionada, que estableció estos supuestos, se incluye dentro de este apartado b), ya que el Tribunal Constitucional consideró que el recurso de amparo tenía especial trascendencia constitucional que le “permitía aclarar e incluso perfilar, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, la doctrina constitucional sobre la exigencia de congruencia entre la acusación y el fallo en el extremo referido a la pena a imponer, en cuanto a manifestaciones del principio acusatorio”.

Cabe destacar algunas de las sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha apreciado la concurrencia de este supuesto. Así, en la STC 131/2016, de 18 de julio, sobre un procedimiento de expulsión de una persona y la necesidad de examinar y analizar el arraigo al país en el que vive y su situación personal, el TC consideró que sí concurría este supuesto de especial trascendencia constitucional y lo explica de la siguiente manera: “Pues bien, en el presente caso, este Tribunal ha apreciado en la providencia de admisión a trámite del recurso que el mismo cuenta con especial trascendencia constitucional ya que puede dar ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2º b.]. En el presente amparo nos encontramos ante un supuesto que ofrece trascendencia social dado que la presente cuestión afecta potencialmente a numerosos residentes de terceros países inmersos en un proceso de expulsión en el caso de que fueran objeto de una condena a pena privativa de libertad superior a un año por una conducta dolosa, con independencia de sus circunstancias personales, familiares, laborales y sociales”. Cómo vemos en esta sentencia se mencionan los supuestos de especial trascendencia que concurren, pero no realiza una explicación sustancial de porque concurre cada uno de ellos⁴⁹.

⁴⁹ Igualmente la STC 38/2017, de 24 de abril, sobre una sanción disciplinaria a un militar por las críticas realizadas a otros miembros del las Fuerzas Armadas, en lo referente a la especial trascendencia constitucional, únicamente menciona que cabe apreciar la existencia de la misma “toda vez que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2º b.]”, pero no se observa una argumentación por parte del Tribunal destinada a explicar la apreciación de este supuesto de especial trascendencia constitucional.

En el mismo sentido la STC 75/2017, de 19 de junio, que versa sobre un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del concepto de consumidor, se limita a considerar que concurre especial

Por el contrario, en la STC 2/2017, de 16 de enero, sobre la modificación de las condiciones laborales como consecuencia de la baja por el nacimiento de un hijo, además de afirmar que concurre esta causa de especial trascendencia constitucional, explica que ello se debe a que permite “profundizar en el contenido de la doctrina constitucional sobre la efectividad del derecho fundamental a no sufrir discriminación por razón de sexo reconocido en el art. 14 CE”.

Por su parte, la reciente STC 85/2020, de 20 de julio, sobre el derecho de acceso a la asistencia jurídica gratuita, admite a trámite el recurso de amparo por entender que concurre el presente supuesto de especial trascendencia constitucional, ya que pese a que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre las decisiones denegatorias de las comisiones de asistencia jurídica gratuita a ciudadanos a quienes les corresponde tal derecho por haber acreditado insuficiencia de recursos para litigar, puede seguir aclarando y perfilando dicha jurisprudencia constitucional, cuando se planteen supuestos con particularidades.

Sin embargo, en otras sentencias actuales como STC 98/2020, de 22 de julio, sobre la valoración de la falta o error en la información proporcionada por el sentencia de la cual trae causa el recurso acerca de los recursos que pueden interponerse, o la STC 95/2020, de 20 de julio, sobre la validez del emplazamiento en sede electrónica en el que el demandante alega no haber recibido toda la información, el TC continúa sin hacer un esfuerzo para argumentar las razones por las cuales considera que concurre esta causa de especial trascendencia constitucional.

Existen otros casos más problemáticos como la prescripción de las penas o la condena penal en apelación⁵⁰, en los que la apreciación de este supuesto para la admisión del recurso parece deberse a que el Tribunal Constitucional no quiere inadmitirlos por razones por ejemplo, relacionadas con la gravedad de la lesión del derecho fundamental. Se trata de cuestiones que no se resuelven aclarando la doctrina, sino aplicando una doctrina existente y ya tradicional del Tribunal Constitucional.

trascendencia constitucional por este motivo, “apreciando que concurre especial trascendencia constitucional [artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC)], como consecuencia de que el recurso pudiera dar ocasión al TC para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2º b.]”,

⁵⁰ STC 14/2016 y STC 105/2016 respectivamente.

En cualquier caso, como ejemplos de aplicación de este supuesto de especial trascendencia constitucional se pueden encontrar muchas sentencias relacionadas con el art. 24 CE, problemas de motivación judicial o de acceso a los recursos. Se trata de pronunciamientos que parecen estar más relacionados con la intención del Tribunal Constitucional de reafirmar la jurisprudencia que no había sido seguida por instancias anteriores, más que con una necesidad real de aclarar la doctrina preexistente.

5.3 Vulneración de un derecho fundamental que provenga de la ley o disposición de carácter general.

El tercero de los supuestos de admisión del recurso de amparo por su especial trascendencia constitucional, según la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2º apartado c) concurrirá cuando “la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general”. Es decir, la vulneración de los derechos en que se fundamenta el recurso proviene de la norma, y puede ser, bien de una ley, o bien de un reglamento o una norma de Derecho internacional⁵¹. Este supuesto de especial trascendencia constitucional permite al TC examinar una norma que se considera que infringe los derechos fundamentales y, en su caso, proceder a expulsarla del ordenamiento jurídico.

Los casos en los que más se ha apreciado este supuesto son aquellos en los que se plantea la impugnación de actos dictados en virtud de normas con rango de ley. En este caso, el Tribunal Constitucional deberá plantearse primero una cuestión interna de inconstitucionalidad y, una vez resuelta esta, procederá a dictar la sentencia que resuelva el recurso de amparo. Hay ocasiones, sin embargo, en las que no es necesario suscitar previamente la cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, cuando esta ley haya sido previamente recurrida ante el Tribunal Constitucional, bien por otro perjudicado, por un órgano judicial o a través de una autocuestión por el propio Tribunal, no será necesario presentar la cuestión de inconstitucionalidad para acudir al recurso de amparo. Según Beladiez Rojo, esto “no priva de especial trascendencia constitucional al recurso de

⁵¹ Art. 10.2 CE “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

amparo”, pudiendo ofrecer al Tribunal Constitucional diferentes puntos de vista de la constitucionalidad de la norma⁵².

El TC tampoco apreciará la cuestión de inconstitucionalidad cuando no haya una efectiva vulneración de un derecho fundamental, como ocurrió, por ejemplo, en la STC 128/2014, de 21 de julio. Por ello, como menciona esta autora no siempre que se aprecie este supuesto de especial trascendencia constitucional el Tribunal Constitucional planteará la cuestión de inconstitucionalidad, lo cual sólo ocurrirá cuando, además de que se haya vulnerado realmente el derecho fundamental, el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado previamente sobre esa norma que se invoca.

Unos de los casos en los que el TC ha apreciado la concurrencia de este supuesto de especial trascendencia constitucional es un recurso contra normas que obligaban a una empresa eléctrica a abonar una parte del déficit tarifario (STC 196/2016). En este caso, se entendía que la aplicación de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico (LSE), vulneraba el art. 14 CE. El Tribunal Constitucional entendió que no era necesario plantear la cuestión de inconstitucional ya que se había resuelto en su STC 167/2016, de 6 de octubre, una cuestión de inconstitucionalidad referida a un supuesto similar al que aquí se trataba, tanto por su naturaleza, como por sus destinatarios, carácter temporal y contexto normativo en el que se enmarcaba. Así mismo, en la STC 61/2017, que trae causa de un recurso de amparo presentado por vulnerar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril el art. 14 CE, al excluirse a un abogado de la asistencia sanitaria. En este caso, tampoco se entendió necesario plantear previamente la cuestión de inconstitucionalidad por haber sido el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril objeto de varios recursos de inconstitucionalidad admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional⁵³.

La otra posibilidad que hemos mencionado al inicio de este apartado es que este supuesto es aplicable a aquellos casos en que se vulnere algún derecho fundamental por una norma reglamentaria o de Derecho internacional. El Tribunal Constitucional comenzó señalando que el recurso de amparo no está previsto examinar la

⁵² BELADÍEZ ROJO, M. *La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales. XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, pág. 44.

⁵³ Así mismo, podemos observar otros ejemplos como la STC 242/2015 que se funda en una reflexión interna del Tribunal Constitucional que proviene de un caso en el que es necesario analizar la constitucionalidad o inconstitucional de la ley o la STC 111/2018 sobre una posible discriminación que no proviene de la aplicación judicial de ley, sino de las normas reguladores del permiso de maternidad y paternidad. En este mismo sentido la STC 138/2018 y la STC 2/2019.

constitucionalidad de las normas reglamentarias, sino la vulneración de derechos fundamentales. Pero más tarde, cambió este enfoque para declarar que si la vulneración de un derecho fundamental tiene su origen en la aplicación de lo dispuesto en un reglamento, anula el precepto que infrinja esos derechos (por ejemplo, STC 78/1999, de 26 de abril). Además, hay que recordar que quedan incluidos dentro de este supuesto las normas de Derecho internacional contrarias a los derechos fundamentales, de manera que puede estudiarse la constitucionalidad de un tratado internacional a través de la impugnación del acto.

5.4 Reiterada interpretación jurisprudencial de la ley lesiva de un derecho fundamental.

Un recurso tendrá también especial trascendencia constitucional, según el apartado d) del FJ 2º de la ST 155/2009, cuando “la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución”.

Según Beladíez Rojo, la mencionada sentencia con la expresión “jurisprudencia” hace referencia a la doctrina elaborada por todos los órganos judiciales y no sólo por el Tribunal Supremo. Sin embargo, para apreciar este supuesto de especial trascendencia constitucional es suficiente con que la reiterada interpretación de la norma lesiva de algún derecho fundamental se lleve a cabo por un único órgano judicial⁵⁴.

Este supuesto en la práctica apenas se ha invocado. Podemos encontrar algunos ejemplos como la STC 131/2016, en el que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso considerando que concurría la especial trascendencia constitucional al tratar de recursos dirigidos contra resoluciones judiciales que no habían analizado de modo suficiente las circunstancias personal y arraigo de una persona que se encontraba en un procedimiento de expulsión. La STC 39/2017 por su parte consideró que había especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo al haberse hecho una interpretación

⁵⁴ BELADÍEZ ROJO, M. *La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales. XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, págs. 47 y 48.

de la legislación procesal que no era compatible con la necesidad de investigar acusaciones de torturas⁵⁵.

5.5 Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional por parte de la jurisdicción ordinaria o existencia de resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental.

Conforme a este criterio, la especial trascendencia constitucional se puede apreciar en dos supuestos; aquellos en los que se produce un incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional y los que dan lugar a la existencia de resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental. En ambos casos se pretende proteger que la doctrina constitucional ya existente, vinculante para todos los órganos judiciales (art. 51 LOPJ y 40.2 LOTC), sea cumplida para garantizar la aplicación de la Constitución y su general eficacia.

En lo relativo al requisito de incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional es preciso que se que se incumpla por varios órganos judiciales y en numerosas ocasiones la doctrina constitucional preexistente por los órganos judiciales⁵⁶.

⁵⁵ Otros ejemplos en los que el Tribunal Constitucional ha apreciado este supuesto son los siguientes: STC 14/2017 sobre la reiterada interpretación jurisprudencial de la ley contraria a la doctrina del TC sobre la expulsión de un extranjero sin tener en cuenta sus circunstancias personales y familiares. La STC 30/2014 sobre la interpretación judicial de la normativa procesal aplicable que ha hecho el órgano a quo y su compatibilidad con la doctrina constitucional sobre los emplazamientos mediante edicto. O el ATC 165/2011, sobre el incumplimiento jurisdiccional de la doctrina constitucional sobre el secreto de las comunicaciones de los internos en los centros penitenciarios, por la intervención administrativa de las comunicaciones de un recluso prohibida en el reglamento penitenciario. En ese mismo sentido, la STC 131/2016, 18 de julio, determina la existencia de especial trascendencia constitucional por tres razones, ausencia de doctrina, reiterada interpretación jurisprudencial de la ley lesiva de un derecho fundamental y repercusión social o económica relevante. Incluso otras más actuales como la STC 89/2020, de 20 de julio, anteriormente mencionada en el apartado a) también declara la concurrencia de este supuesto d) de especial trascendencia constitucional. Por todo ello, parece que el Tribunal Constitucional ha utilizado este supuesto de especial trascendencia constitucional, por lo general, de forma cumulativa como otras causas de especial trascendencia constitucional.

⁵⁶ GONZÁLEZ BEILFUSS, M. “La especial trascendencia constitucional de las demandas de amparo. Análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre un concepto etéreo” *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 107, 2016, pág. 358. El autor ha señalado que el Tribunal ha utilizado diferentes criterios para referirse al incumplimiento de su doctrina. Ha hecho referencia en ocasiones a la “admisión a trámite de otras demandas de amparo sobre supuestos similares; [...] a la existencia de un número relevante de sentencias constitucionales que han estimado recursos similares, [...] incluso a la existencia de condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos parecidos”. Concluye así, que la finalidad de este supuesto es “defender la doctrina constitucional frente a incumplimientos no ocasionales de esta por la jurisdicción ordinaria”.

Según Montañés Pardo, el incumplimiento general se aprecia cuando son varios órganos judiciales los que incumplen la doctrina constitucional, mientras que el incumplimiento reiterado, se da cuando es un único órgano judicial el que incumple la doctrina, pero en diversas ocasiones. Sin embargo, dicho autor señala que “no queda del todo claro si ambos deben concurrir conjuntamente”⁵⁷. Por su parte, Beladíez Rojo entiende que lo que parece exigirse para apreciar este supuesto no es el incumplimiento aislado de un órgano judicial como consecuencia de incurrir ocasionalmente en un error jurídico de interpretación o aplicación de la doctrina constitucional, es decir, que no basta con el incumplimiento aislado de la doctrina por un órgano judicial⁵⁸. A mi entender para que el incumplimiento pueda considerarse general y reiterado deberá producirse por varios órganos judiciales y habitualmente, de manera que sea común a todos los individuos o al menos a la mayor parte de ellos.

En la STC 144/2016, de 19 de septiembre, sobre la necesidad de investigar las denuncias de torturas, podemos ver como el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de amparo por incumplirse la doctrina constitucional de manera general, es decir por varios órganos judiciales, pero en ningún momento hace referencia al incumplimiento reiterado. Por su parte, en la STC 1/2020, de 14 de enero, el Tribunal Constitucional argumenta la doctrina que se está incumpliendo de forma “general”, siendo esta la STC 167/2002, de 18 de septiembre, FFJJ 9 a 11 “según la cual el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción”⁵⁹.

En relación con la exigencia del segundo de los supuestos -la existencia de resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental-, según Montañés

⁵⁷ MONTAÑÉS PARDO, M. A. “La especial trascendencia constitucional como presupuesto del recurso de amparo”. (Disponible en [_____](#)), pág. 6.

⁵⁸ BELADÍEZ ROJO, M. *La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales. XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, pág. 50.

⁵⁹ Esta jurisprudencia fue además, completada posteriormente por la STC 184/2009, de 7 septiembre, FJ 3º indicando que “en aquellos casos en los que se condena en segunda instancia, revocando una previa absolución, o se agravan sus consecuencias, debe igualmente atenderse a la eventual exigencia de la audiencia personal del acusado como garantía específica vinculada al derecho de defensa (art. 24.2 CE).

Pardo, afirma que tal exigencia tiene la finalidad de “unificar la interpretación y aplicación judicial de la propia doctrina constitucional”. La existencia de resoluciones contradictorias se puede deber a que los órganos judiciales hagan una interpretación diferente de la doctrina existente o a que la apliquen en unos casos y en otros no. Este supuesto de especial trascendencia constitucional sirve para aclarar cuál tiene que ser la interpretación de la doctrina constitucional⁶⁰.

Cabe mencionar, que para que concurra dicha contradicción es necesario que los órganos judiciales resuelvan un caso similar de manera opuesta porque han interpretado de manera diferente la doctrina constitucional⁶¹. El ATC 47/2017, de 7 de marzo, ha matizado que el simple hecho de dictar resoluciones contradictorias no conlleva que la doctrina constitucional esté siendo aplicada de forma contradictoria.

En las SSTC 219/2016 y 220/2016, de 19 de diciembre, el TC estimó que existía especial trascendencia constitucional porque se alegó que existían resoluciones contradictorias sobre el legalidad sancionadora. Además, de estas sentencias se desprenderse que la carga de justificar la contradicción en las resoluciones judiciales la tiene el demandante, cuando mencionan que se considera que los recursos poseen “especial trascendencia constitucional al haber acreditado los recurrentes la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en la aplicación del art. 25 CE”.

En ocasiones el Tribunal Constitucional no especifica el concreto supuesto que origina la ETC; incumplimiento general y reiterado de la doctrina o la existencia de resoluciones contradictorias sobre el derecho fundamental. La STC 80/2020, de 15 de julio se limita a mencionar la admisión a trámite del recurso de amparo por la concurrencia de “especial trascendencia constitucional porque la doctrina de este tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental”, pero no diferencia cuál de los dos es apreciable en este caso. Sin embargo, de su redacción puede colegirse que se trata del supuesto de resoluciones contradictorias al mencionar que se aportan resoluciones de

⁶⁰ MONTAÑÉS PARDO, M. A. “La especial trascendencia constitucional como presupuesto del recurso de amparo”. (Disponible en [_____](#), pág. 6.

⁶¹ BELADÍEZ ROJO, M. *La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales. XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, pág. 52.

diferentes órganos judiciales que manifiestan posiciones contradictorias sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, a pesar de no mencionar explícitamente el Tribunal Constitucional cuál de los subapartados concurre, continúa haciendo referencia a cuál de ellos nos ocupa, como ha venido haciendo ya anteriormente⁶².

5.6 Negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional.

El supuesto contemplado en este apartado, previsto en el FJ 2º f. de la STC 155/2009, “negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional por parte de un órgano judicial”, puede apreciarse de tres formas: la negativa manifiesta de los órganos judiciales a acatar la doctrina constitucional, la acreditación de actos de los cuales se deduce la voluntad de los mismos de no acatar la doctrina constitucional y por último, la denominada “negativa manifiesta pero implícita de acatamiento”⁶³.

Para poder apreciar esta causa de especial trascendencia constitucional de cualquiera de las formas anteriormente mencionadas no basta con una contradicción con las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Se trata, por tanto, de acreditar la existencia de un “elemento intencional o volitivo”⁶⁴ de desobedecer la dicha doctrina.

El art. 5.1 LOPJ expresa la obligación de todos los jueces y tribunales de interpretar y aplicar las normas jurídicas “según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”. Por su parte el art. 40.2 LOTC ha establecido que la jurisprudencia de los tribunales de justicia será corregida por la “doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales”. Por ello, cuando los tribunales de justicia se niegan a aplicar la doctrina constitucional incurren en una infracción grave del ordenamiento jurídico y

⁶² SSTC 51/2016, 63/2016, 106/2016 y 144/2016.

⁶³ SSTC 5/2017 y 6/2017, ambas de 16 de enero. El Tribunal Constitucional expresa que, aunque el incumplimiento judicial es implícito, “no por ello deja de ser manifiesto”.

⁶⁴ ATC 26/2012, de 31 de enero, FJ 3º “[...] elemento intencional o volitivo que caracteriza el concreto supuesto de especial trascendencia constitucional”

en una alteración del sistema de fuentes, que podría conllevar la ineficacia de la Constitución.

La STC 32/2020, de 24 de febrero, recuerda los requisitos que ha ido fijando la jurisprudencia y que son necesarios para que concurra el supuesto de la negativa manifiesta del deber de acatamiento: a. que no puede ser identificada con el error en la interpretación o apreciación de la jurisprudencia, “incluso si fuera objetivable y verificable en el caso concreto”⁶⁵, sino como la intención de no aplicar la jurisprudencia expresada en la sentencia; o dicho en otras palabras, “a una decisión consciente de soslayarla”⁶⁶; b. el incumplimiento por sí solo de la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional no puede ser considerado como un supuesto de especial trascendencia constitucional, pero una vez advertida la cualidad que hace del mismo un supuesto de trascendencia constitucional (es decir, la existencia de una negativa manifiesta), este Tribunal debe conocer del recurso y aplicar su doctrina al caso concreto; c. procede apreciar la concurrencia de dicho elemento intencional en supuestos en los que el órgano judicial, aun conociendo la doctrina constitucional, dado que había sido citada y extractada en lo fundamental en el escrito por el que se hubo promovido el incidente de nulidad de actuaciones, lo resolvió sin hacer consideración alguna sobre ella⁶⁷; y d. en todo caso, la cita de la doctrina constitucional ha de ser concreta y precisa, “no siendo suficiente cualquier pronunciamiento jurisprudencial que se entienda incumplido”⁶⁸. Por último, es necesario, en todo caso, que el recurrente haya alegado la doctrina que no es acatada por los órganos ordinarios.

El primero de los criterios -la negativa manifiesta expresa de acatar la doctrina constitucional-, se observará cuándo los órganos judiciales declaren abiertamente su voluntad de no acatar la doctrina constitucional. De conformidad con Beladiez Rojo, dicha negativa al cumplimiento de la CE se origina, unas veces por conflictos entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional. Ello se desprende de la STC 63/2005, de 14 de marzo, en la cual el Tribunal Constitucional estableció como debía computarse la prescripción de los delitos y algunos órganos judiciales decidieron no aplicar esa doctrina. Sin embargo, la autora considera que en otras ocasiones se debe más al desconocimiento por parte de los órganos judiciales del “valor y fuerza de obligar de

⁶⁵ STC 106/2017, de 18 de septiembre, FJ 2º.

⁶⁶ STC 83/2018, de 16 de julio, FJ 3º.

⁶⁷ STC 5/2018, de 22 de enero, FJ 2º.

⁶⁸ STC 106/2017, de 18 de septiembre, FJ 2º.

las resoluciones del Tribunal Constitucional”⁶⁹. A mi juicio, debe probarse el conocimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional como condición para determinar si existió voluntad de soslayar la doctrina del TC entre conocer la doctrina, el deber de ser acatada y aun así decidir voluntariamente no acatarla; y no conocer la obligación de acatar dicha doctrina y consecuentemente no aplicarla, ya que en este segundo caso no existe voluntad por parte del órgano judicial de eludir la doctrina del Tribunal Constitucional.

En cuanto a los actos de los que se deduce la voluntad de los órganos judiciales de no acatar la doctrina constitucional, podrá observarse cuando a pesar de que estos no declaren específicamente su voluntad de no aplicar la doctrina constitucional, realicen actos que evidencien ese deseo⁷⁰.

El Tribunal Constitucional también ha determinado que existe trascendencia objetiva cuando existe una negativa manifiesta del órgano judicial, no argumentada de modo expreso por el mismo. Es lo que el Tribunal Constitucional ha denominado una “negativa manifiesta implícita”. Esto se observa cuando exista negativa de acatar la doctrina constitucional que se origina cuando la parte demandante alegue la doctrina constitucional que debe ser aplicada al caso y exponga un supuesto similar en el cual se ha aplicado, y sin embargo, el órgano judicial no la aplique, aunque no exprese su decisión de separarse de la misma. En suma, la no determinación expresa de separación de la doctrina constitucional cuando ésta sea alegada por el demandante en su argumentación determina una voluntad implícita de no acatarla⁷¹.

González Beilfuss considera que el TC no ha clarificado suficientemente este supuesto de ETC y el relativo al cumplimiento general y reiterado de la doctrina del Tribunal Constitucional. Un ejemplo de este supuesto es que la doctrina sobre el incumplimiento de la prescripción de los delitos se considera en unos casos como

⁶⁹ BELADÍEZ ROJO, M. *La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales. XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, pág. 55

⁷⁰ En la STC 59/2011, de 3 de mayo, en la cual el Tribunal Constitucional entendió que concurría este supuesto de especial trascendencia constitucional al negarse manifiestamente el órgano judicial en la sentencia de la cual trae causa el recurso de amparo ya que anteriormente el TC había admitido varios recursos de amparo contra sus resoluciones por no estar debidamente motivadas, dicho órgano judicial continúa dictando resoluciones sin estar debidamente motivadas, incurriendo consecuentemente en los mismo defectos.

⁷¹ En este caso, el Tribunal Constitucional, en sus SSTC 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero, FJ 2º, ha considerado que aunque el órgano judicial no determine su separación expresa de la doctrina constitucional, existe una voluntad implícita de no acatarla.

desacato manifiesto de la doctrina constitucional⁷² y, sin embargo, en otros como un incumplimiento general y reiterado de la doctrina del Tribunal Constitucional⁷³.

En otros supuestos, el TC determina que existe voluntad manifiesta de soslayar su doctrina por parte del órgano judicial, pero no establece cuáles son las razones que le llevan a esta argumentación⁷⁴. Pues no especifica la doctrina incumplida, ni cuál de los tres supuestos expresados se aplicaría en el caso concreto⁷⁵.

La doctrina del Tribunal Constitucional es fluctuante, pues en otros casos, ha mencionado el supuesto aplicable -negativa manifiesta implícita a acatar la doctrina constitucional porque la recurrente argumentó que en el incidente de nulidad de actuaciones invocó la doctrina constitucional que correspondía aplicar y aun así no se acató por el órgano judicial. Dicho de otra forma, no sólo menciona el supuesto de ETC que se aplica; también evidencia la doctrina que no se ha acatado por los tribunales ordinarios⁷⁶.

5.7 Relevante y general repercusión social o económica de la cuestión suscitada, o consecuencias políticas generales de la misma.

La relevancia y repercusión social o económica de la cuestión suscitada, o las consecuencias políticas generales que se deriva de la misma, constituyen el último supuesto de especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, FJ 2º g.) El Tribunal Constitucional ha considerado que el recurso de amparo puede presentar una especial trascendencia constitucional porque plantee cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales”. Como podemos observar, de este supuesto también se desprende que la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo se puede apreciar en dos situaciones, bien porque la

⁷² STC 22/2017, de 13 de febrero.

⁷³ STC 51/2016, de 14 de marzo.

⁷⁴ Un ejemplo de ello es la STC 68/2020, de 29 de junio, en la cual el TC se limita a reproducir la existencia de especial trascendencia constitucional por este motivo, pero no especifica ni la doctrina incumplida, ni ante cual de los tres supuestos posibles nos encontramos

⁷⁵ GONZÁLEZ BEILFUSS, M. “La especial trascendencia constitucional como criterio de selección de los recursos de amparo”. AFDUAM, núm. 22, 2018, pág. 276.

⁷⁶ En la STC 29/2020, de 24 de febrero, el Tribunal Constitucional hace el esfuerzo de aclarar cuál es la doctrina que no se ha acatado por los tribunales ordinarios para explicar el supuesto de ETC que concurre.

cuestión planteada tenga relevante y general repercusión social o económica o porque tenga consecuencias políticas generales.

Este supuesto diferencia, de un lado, la general repercusión social o económica de la cuestión, y, de otro, las consecuencias políticas generales que puedan derivarse de la misma.

El Tribunal Constitucional ha establecido que relevante repercusión social o económica se origina de la afectación del recurso a una pluralidad de personas. Ello puede tener lugar porque la sentencia afecte a los derechos o intereses de muchas personas o porque dicha sentencia cree doctrina que después deberán ser aplicada por el resto de órganos judiciales en situaciones similares. El TC ha apreciado esta causa de especial trascendencia constitucional, por ejemplo, en su sentencia sobre liquidación tributaria que afectaba a varias empresas importantes del sector eléctrico y que, además, tenía un importante impacto económico⁷⁷ o en su sentencia sobre los bienes jurídicos que hay que ponderar en los supuestos de expulsión en materia de inmigración⁷⁸. En ambos casos el Tribunal Constitucional ha apreciado la existencia de especial trascendencia constitucional por afectar a una pluralidad de personas. También podrá incluirse dentro de estos casos, aquellos que tengan repercusión general para la sociedad.

El segundo de los supuestos hace referencia a que el recurso tenga consecuencias políticas generales. Según la STC 155/2009, las consecuencias políticas generales pueden concurrir “sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”. La mayor parte de los problemas suscitados han generado recursos de amparo parlamentarios o electorales. Según González Beilfuss este supuesto ha planteado más problemas en la práctica, ya que “su carácter expresamente supletorio y los términos empleados para describirlo confieren al supuesto de la letra g) un grado de indeterminación y discrecionalidad que es todavía mayor que en los supuestos anteriores”⁷⁹.

⁷⁷ STC 91/2016, de 9 de mayo.

⁷⁸ STC 131/2016, de 18 de julio.

⁷⁹ GONZÁLEZ BEILFUSS, M. “La especial trascendencia constitucional de las demandas de amparo. Análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre un concepto etéreo”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 107, 2016, pág. 360. Además el autor ha mencionado, como comentábamos, que la mayor parte de recursos en los que se ha apreciado esta causa de especial trascendencia constitucional han sido recurso de amparo electorales y parlamentarios, aunque estos últimos en menor medida.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha precisado que sólo el carácter electoral o parlamentario de estos recursos no determina que posean especial trascendencia constitucional. Sin embargo, Beladiez Rojo, ha criticado la doctrina del TC por asimilar la especial trascendencia constitucional a las consecuencias políticas generales que tiene el caso. En jurisprudencia reiterada, el Tribunal Constitucional ha señalado que los recursos de amparo presentados con base en este supuesto de especial trascendencia constitucional están “en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva respecto de la valoración de la especial trascendencia constitucional [...] dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra”.⁸⁰ En este sentido, se evidencia la una evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hacia la identificación de los amparos electorales y parlamentarios como supuestos de que por su propia naturaleza trascienden del caso concreto.

⁸⁰ STC 1/2015, de 19 de enero.

6. CONCLUSIONES.

1ª.-La inclusión de la especial trascendencia constitucional como requisito de admisión en la reforma de la LOTC operada mediante Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, pretende resolver la situación de colapso y saturación del Tribunal Constitucional derivada, fundamentalmente, de la acumulación de recursos de amparo pendientes de admisión y, en su caso, resolución tras más de dos décadas de funcionamiento.

2ª.- La concurrencia y justificación, en sus vertientes formal y material, de una especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, como requisito insubsanable para su admisión a trámite, constituye el núcleo de la reforma llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo que ha conllevado una objetivación del recurso de amparo y ha reforzado su carácter subsidiario, aun sin perder su finalidad última de constituir un medio para la protección de los derechos fundamentales atribuida con carácter general a los Tribunales ordinarios. Su relevancia como requisito positivo de admisión del recurso de amparo es la que justifica que el Tribunal Constitucional se haya visto en la necesidad de concretar o desarrollar, a partir de su sentencia 155/2009, la definición genérica de este requisito que se contiene en el art. 50.1.b) LOTC por referencia a la justificación de una decisión sobre el fondo del recurso atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

3ª.- Un análisis de los resultados prácticos que ofrece la aplicación de la reforma permite concluir que la misma ha logrado en gran medida sus objetivos, vista la reducción notable del número de recursos que acceden anualmente al Tribunal Constitucional y de los que se encuentran pendientes de resolución ante él, efecto que se consigue mediante el establecimiento de requisitos más rigurosos para la admisión a trámite del recurso de amparo y una simplificación del cauce formal para acordar su inadmisión.

4ª.- La especial trascendencia constitucional resultante del planteamiento de una nueva cuestión desde una perspectiva constitucional, por incidir sobre una nueva faceta de un derecho fundamental, se muestra como uno de los criterios más importantes y de los más utilizados en la práctica. Su apreciación se vincula, en principio, al planteamiento de una cuestión constitucional nueva (no simplemente a la existencia de supuesto de hecho novedoso), bien por no existir doctrina previa, bien por derivar de una modificación legislativa; no obstante, su aplicación se ha efectuado con notable amplitud por el Tribunal Constitucional, quien en no pocas ocasiones ha apreciado por este motivo la

especial trascendencia constitucional de recursos que son resueltos en aplicación de doctrina preexistente del propio Tribunal.

5ª.- El recurso de amparo reviste, en segundo lugar, especial trascendencia constitucional cuando se constata la necesidad de que por el Tribunal Constitucional se proceda a aclarar, matizar o cambiar su propia doctrina, bien como consecuencia de un proceso de reflexión interna, bien por el surgimiento de nuevas realidades sociales o cambios normativos relevantes para la configuración del derecho fundamental, bien por el cambio en la interpretación de la doctrina de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE. Este criterio ha sido apreciado también con notoria amplitud en la práctica, sin exigir (como pareciera ser necesario en principio) que el recurrente invoque jurisprudencia contradictoria sobre el derecho fundamental que se considera vulnerado. Ello, a mi juicio, no es sino consecuencia del hecho de que la aplicación de este criterio descansa en un elemento intencional, esto es, en la voluntad o decisión previa del propio TC sobre la necesidad de completar o modificar su doctrina, lo que en último extremo permite concluir la existencia de este supuesto siempre que quiera admitir a trámite un recurso de amparo (la posibilidad teórica de cambiar, matizar o aclarar la doctrina existe casi siempre por definición).

6ª.- El tercer supuesto de especial relevancia constitucional, concretado en la vulneración de un derecho fundamental que provenga de la ley o disposición de carácter general, ha sido interpretado de forma amplia por el Tribunal al englobar dentro de este supuesto no únicamente la lesión de un derecho fundamental con causa en una norma con rango de ley, sino también la proveniente de disposiciones de rango inferior como reglamentos e instrucciones. A la vez, la aplicación práctica de este criterio no viene exigiendo del recurrente una justificación especialmente reforzada, ya que la necesidad de un pronunciamiento del TC en estos casos deriva del propio origen normativo (y, por tanto, con alcance general) de la eventual lesión del derecho fundamental.

7ª.- La reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que se considere lesiva de un derecho fundamental, cuarto de los supuestos de especial trascendencia constitucional en la sentencia 155/2009, es objeto también de un criterio amplio de aplicación, en la medida en que el concepto de jurisprudencia se hace extensivo a la doctrina de cualquier Tribunal ordinario, y no solo del Tribunal Supremo. No obstante, este mismo concepto parece requerir la reiteración en la interpretación lesiva de un determinado derecho fundamental, si bien, a mi juicio, bastará con que dicha interpretación se realice por un único órgano judicial, al no establecerse un requisito de generalidad.

8ª.- El incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional o la existencia de resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, como supuesto de especial trascendencia constitucional, contempla dos supuestos distintos, pero que atienden a una razón última común, como es la de asegurar la primacía del TC en la interpretación y aplicación de la CE y la garantía de los derechos fundamentales en aquellos casos en los que, de forma generalizada, la doctrina del TC este siendo incumplida o aplicada de modo dispar por los tribunales ordinarios. En el primero de los supuestos surge la duda de si el incumplimiento tiene que ser conjuntamente general y reiterado para la admisión a trámite del recurso, o es suficiente con que concurra uno de ellos; a mi entender, será necesario que concurran ambos al denominarlo el propio TC en su STC 155/2009 como incumplimiento “general y reiterado”. En cuanto al segundo de los supuestos, será necesario que se hayan resuelto dos casos muy similares de manera distinta como consecuencia de la dispar interpretación de la doctrina constitucional, no siendo suficiente con la existencia de resoluciones contradictorias; esto tiene sentido, bajo mi punto de vista, ya que para que la existencia de contradicción tiene que apreciarse sobre dos resoluciones semejantes.

9ª.- El sexto supuesto, la negativa del deber de acatamiento de la doctrina constitucional, que tiene un fundamento legal común con el supuesto anterior, encuentra su razón última en la disparidad de criterio que en bastantes ocasiones han mostrado los Tribunales ordinarios y el TC. En todo caso, su aplicación no exige (a diferencia de los supuestos anteriores) que la negativa sea reiterada, aunque sí parece ser necesario un elemento volitivo o intencional (no basta el mero desconocimiento por el tribunal ordinario de la existencia o contenido de la doctrina del TC). No obstante, su aplicación práctica se ha llevado a cabo con bastante amplitud, admitiendo que la negativa pueda manifestarse de forma implícita o mediante actos concluyentes.

10ª.- Por último, el séptimo supuesto, la relevante y general repercusión social o económica de la cuestión suscitada o la existencia de consecuencias políticas generales, se concreta en la existencia de efectos generales, de carácter social, económico o político, cuyo margen de apreciación por el TC es muy amplio y le permite, en definitiva, conocer aquellos recursos de amparo en los que se planteen cuestiones con repercusión general notable (que justifica en sí misma la admisión del recurso por su especial trascendencia), especialmente las suscitadas en el ámbito político y electoral, si bien este caso no parece que quepa incluir la mera lesión de un derecho fundamental, por grave que sea, si esta no trasciende del caso concreto.

7. BIBLIOGRAFÍA.

- ARAGÓN REYES, M. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, págs. 11-43.
- BELADÍEZ ROJO, M. *La nueva perspectiva de la tutela procesal de los derechos fundamentales. XXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018.
- CARRILLO, M. (Coord.), *Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*, *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm.87, 2008, págs. 429 - 457.
- FERNÁNDEZ FARRERES, G. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”, en M. Carrillo (Coord.), *Hacia una nueva jurisdicción constitucional (Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC*, Tiran lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 11 - 62.
- GARCÍA CABAÑAS, J. C. “El recurso de amparo que queremos”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 88, 2010, págs. 39 - 81.
- GARRORENA MORALES, A. “La Ley Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica”, en M. Carrillo (Coord.), *Hacia una nueva jurisdicción constitucional (Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC)*, Tiran lo Blanch, Valencia, 2008.
- GÓMEZ FERNÁNDEZ, I. Y MONTESINOS PADILLA, C. “Una década de incidencia de nulidad de actuaciones: ¿aclaración, reforma o supresión?”. *Revista de Derecho Constitucional*, núm. 113, 2018, págs. 71 - 102.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, M. “La especial trascendencia constitucional de las demandas de amparo. Análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre un concepto etéreo”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 107, 2016, págs. 333 - 367.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, M. “La especial trascendencia constitucional como criterio de selección de los recursos de amparo”. *AFDUAM*, núm. 22, 2018, págs. 259 - 279.
- MATIA PORTILLA, F. J. “La trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”. *Revista Española de Derecho Constitucional*. núm. 86, 2009, págs. 343 - 368.

- MONTAÑÉS PARDO, M. A. “La especial trascendencia constitucional como presupuesto del recurso de amparo”. (Disponible en <https://docplayer.es/47168913-La-especial-trascendencia-constitucional-como-presupuesto-del-recurso-de-amparo.html>).
- MONTESINOS PADILLA, C. “Tutela multinivel de los derechos: Obstáculos procesales”. Tesis doctoral, Getafe, 2015.
- PADRÓS REIG, C. “La exigua tasa de admisión del recurso de amparo constitucional”. *Revista de Administración Pública*, núm. 209, 2019, págs. 307 - 347.
- SOSPEDRA NAVAS, F.J. “Los requisitos procesales del recurso de amparo: el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la especial trascendencia constitucional”. *Cuaderno de derecho Local*. ISSN 1696-0955, 2015. Págs. 162 - 193.

8. ANEXO JURISPRUDENCIAL.

8.1 Sentencias del Tribunal Constitucional

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 130/2018, de 12 de diciembre (RTC 1440/2018).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 140/2013, de 8 de julio (RTC 2034/2011).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 155/2009, de 25 de junio (RTC 7329/2008).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/2013, de 28 de enero (RTC 6052/2010).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 241/1992, de 21 de diciembre (529/1990).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 53/1983, de 20 de junio (RTC 22/1983).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 64/1988, de 12 de abril (RTC 1375/1986).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 112/2019, de 3 de octubre (RTC 2598/2017).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/2013, de 28 de enero (RTC 6052/2010).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 217/2012, de 26 de noviembre (RTC 1595/2009).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 112/2019, de 3 de octubre (RTC 2598/2017).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1991, de 11 de febrero (RTC 1456/1988).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 15/2019, de 11 de febrero (RTC 2769/2016).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 188/1990, de 26 de noviembre (RTC 1072/1988).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 211/1999, de 29 de noviembre (RTC 4061/1995).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 65/1985, de 23 de mayo (RTC 248/1983).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 114/1986, de 2 de octubre (RTC 1197/1985).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 172/1991, de 16 de septiembre (RTC 213/1989).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 79/2004, de 5 de mayo (RTC 3391/2002).

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 27/2019, de 26 de febrero (RTC 4706/2018).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 130/2018, de 31 de octubre (RTC 6412/2015).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 304/1993, de 25 de octubre (RTC 1482/1990 y 2291/1990).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/2008, de 21 de enero (RTC 1140/2006).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 38/2011, de 28 de marzo (RTC 9176/2008).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 184/2007, de 10 de septiembre (RTC 6530/2004).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 8/2017, de 19 de enero (RTC 2341/2012).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 17/2011, de 28 de febrero (RTC 3556/2010).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 128/2014, de 21 de julio (RTC 4716/2012).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 69/2011, de 16 de mayo (RTC 5530/2010).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 143/2011, de 26 de septiembre (RTC 9975/2008).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 191/2011, de 12 de diciembre (RTC 8617/2008).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 176/2012, de 15 de octubre (RTC 9876/2009).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 118/2014, de 8 de julio (RTC 4715/2012).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 31/2013, de 11 de febrero (RTC 4759/2011).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 89/2014, de 9 de junio (RTC 1591/2010).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 198/1999, de 25 de octubre (RTC 147/1999).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 56/2013, de 11 de marzo (RTC 7271/2010).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 139/2015, de 22 de junio (RTC 3457/2012).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 7/2015, de 22 de enero (RTC 2399/2012).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 70/2009, de 23 de marzo (RTC 2826/2004).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 165/2011, de 3 de noviembre (RTC 5876/2011).
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 58/2019, de 6 de mayo (RTC 1376/2018).

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 122/2013, de 20 de mayo (RTC 6076/2010)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 125/2013, de 23 de mayo (RTC 2823/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 77/2015, de 27 de abril (RTC 3303/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2015, de 20 de julio (RTC 6203/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 262/2015, de 14 de diciembre (RTC 1889/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 263/2015, de 14 de diciembre (RTC 4093/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 222/2015, de 2 de noviembre (RTC 7238/2012)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 112/2016, de 20 de junio (RTC 2514/2012)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 142/2011, de 27 de septiembre (RTC 9283/2006)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 2/2011, de 14 de febrero (RTC 2624/2006)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 136/2017, de 27 de noviembre (RTC 6138/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 147/2016, de 19 de septiembre (RTC 5750/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 126/2017, de 13 de noviembre (RTC 5291/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 127/2017, de 13 de noviembre (RTC 5353/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 129/2017, de 13 de noviembre (RTC 2031/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2017, de 18 de diciembre (RTC 3566/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 115/2013, de 9 de mayo (RTC 1246/2011)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 29/2014, de 24 de febrero (RTC 8363/2010)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 8/2017, de 19 de enero (RTC 2341/2012)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 2/2017, de 16 de enero (RTC 2723/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/2017, de 30 de enero (RTC 3497/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 38/2017, de 24 de abril (RTC 7430/2015)

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 154/2016, de 22 de septiembre (RTC 6144/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 65/2015, de 13 de abril (RTC 1485/2013 y 1486/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 89/2020, de 20 de julio (RTC 505/2019)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 74/2020, de 29 de junio (RTC 2094/2019)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/2016, de 1 de febrero (RTC 533/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 12/2016, de 1 de febrero (RTC 3719/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 131/2016, de 18 de julio (RTC 5646/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 38/2017, de 24 de abril (RTC 7430/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 75/2017, de 19 de junio (RTC 1582/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 85/2020, de 20 de julio (RTC 4795/2017)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 98/2020, de 22 de julio (RTC 4834/2018)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 95/2020, de 20 de julio (RTC 3695/2019)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 14/2016, de 1 de febrero (RTC 7419/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 105/2016, de 6 de junio (RTC 2569/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 128/2014, de 21 de julio (RTC 4716/2012)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 196/2015, de 21 de septiembre (RTC 6011/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2016, de 6 de octubre (RTC 6599/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 61/2017, de 22 de mayo (RTC 935/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 78/1999, de 26 de abril (RTC 3066/1996)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 242/2015, de 30 de noviembre (RTC 6469/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 111/2018, de 17 de octubre (RTC 4344/2017)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 138/2018, de 17 de diciembre (RTC 275/2018)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 2/2019, de 14 de enero (RTC 308/2018)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 131/2016, de 18 de julio (RTC 5646/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 39/2017, de 24 de abril (RTC 332/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 30/2014, de 24 de febrero (RTC 6919/2011)

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 14/2017, de 30 de enero (RTC 1920/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 144/2016, de 19 de septiembre (RTC 2443/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 1/2020, de 14 de enero (RTC 3218/2017)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2002, de 18 de septiembre (RTC 2060/1998)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 184/2009, de 7 de septiembre (RTC 7052/2005)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 219/2016, de 19 de diciembre (RTC 7461/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 220/2016, de 19 de diciembre (RTC 7463/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 80/2020, de 15 de julio (RTC 1771/2018)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 51/2016, de 14 de marzo (RTC 5251/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 63/2016, de 11 de abril (RTC 4577/2011)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 106/2016, de 6 de junio (RTC 3379/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 5/2017, de 16 de enero (RTC 4591/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 6/2017, de 16 de enero (RTC 1881/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 32/2020, de 24 de febrero (RTC 4046/2018)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 106/2017, de 18 de septiembre (RTC 4129/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 83/2018, de 16 de julio (RTC 3849/2017)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 5/2018, de 22 de enero (RTC 5832/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 106/2017, de 18 de septiembre (RTC 4129/2016)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 63/2005, de 14 de marzo (RTC 6819/2002)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 22/2017, de 13 de febrero (RTC 5046/2015)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 51/2016, de 14 de marzo (RTC 5251/2014)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 29/2020, de 24 de febrero (RTC 5699/2017)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 68/2020, de 29 de junio (RTC 4869/2018)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 91/2016, de 9 de mayo (RTC 2772/2014)

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 1/2015, de 19 de enero (RTC 5178/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 212/2016, de 15 de diciembre (RTC 1206/2013)
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 71/2017, de 5 de junio (RTC 3292/2016)

8.2 Autos del Tribunal Constitucional.

- Auto del Tribunal Constitucional núm. 47/2017, de 7 de marzo (RTC 5455/2016)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 77/2015, de 7 de mayo (RTC 3303/2013)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 28/2013, de 11 de febrero (RTC 5469/2012)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 26/2012, de 31 de enero (RTC 6190/2009)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 29/2011, de 17 de marzo (RTC 908/2010)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 165/2011, de 3 de noviembre (RTC 5876/2011)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 187/2010, de 29 de noviembre (RTC 1826/2009)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 183/2009, de 15 de junio (RTC 6026/2008)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 187/2009, de 22 de junio (RTC 4597/2008)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 252/2009, de 19 de octubre (RTC 2623/2009)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 272/2009, de 26 de noviembre (RTC 7508/2008)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 283/2009, de 17 de diciembre (RTC 5932/2007)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 188/2008, de 21 de julio (RTC 1282/2008)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 232/2000, de 2 octubre (RTC 553/1999)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 1193/1988, de 24 de octubre (RTC 705/1988)
- Auto del Tribunal Constitucional núm. 18/1980, de 24 de septiembre.